



RADAR LATAM 360

Dr. Daniel Zovatto

Presidente de LATAM ASESORÍA ESTRATÉGICA 360

Director-Editor de Radar Latam 360

EDITORIAL



Perú: La fotografía de una elección fragmentada, cuestionada y bajo presión

Por Daniel Zovatto. Director y editor de Radar Latam 360.

Seis días después del cierre de la jornada electoral general del 12 de abril —y 110 horas después de la votación excepcional en 13 centros de Lima el lunes 13—, Perú ofrece una fotografía de máxima preocupación: algunas certezas comienzan a emerger, pero la incógnita central —quiénes disputarán el balotaje— sigue abierta, envuelta en una marcada tensión política y en una creciente erosión de la confianza en el organismo encargado de organizar la elección, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

No se trata simplemente de una elección compleja —la más exigente en la historia electoral peruana según había alertado la propia ONPE en los días previos a la jornada electoral—, sino de un proceso severamente cuestionado por la acumulación de irregularidades logísticas.

En efecto, el proceso electoral de 2026 ha estado marcado por una combinación de factores que anticipaban su carácter desafiante: una fragmentación extrema de la oferta —35 candidatos presidenciales y 37 partidos—; una cédula de votación inusualmente compleja, con cinco columnas correspondientes a las distintas categorías de elección y dimensiones de 42 por 44 centímetros; fallas

logísticas relevantes; y una peligrosa narrativa de denuncias de fraude que, aun sin pruebas concluyentes, ha ido ganando terreno en el debate público.

Una elección compleja bajo tensión desde el inicio

A diferencia de 2021 —cuando la crisis político-electoral se concentró en la segunda vuelta—, esta vez la tensión se instaló desde la primera ronda. Las irregularidades registradas durante la jornada han sido lo suficientemente graves como para suscitar serios cuestionamientos sobre la integridad del proceso.

Desde la cuestionada selección de proveedores para el transporte del material electoral hasta fallas operativas —como la falta de tinta en centros de votación—, pasando por problemas en sistemas clave de comunicación (SAET) y afirmaciones oficiales que posteriormente no se verificaron en la práctica, el conjunto de deficiencias ha terminado por afectar la credibilidad del proceso y la confianza en la ONPE.

En una rueda de prensa el martes 14, la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), Annalisa Corrado, no dejó lugar a ambigüedades: si bien expresó su respaldo al proceso —calificándolo de creíble y transparente— y descartó la existencia de fraude ante la falta de pruebas, subrayó que “está claro que ha habido problemas graves”, en particular el hecho de que 13 centros electorales no pudieran abrir el domingo. Asimismo, instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva de estas irregularidades logísticas. Informes preliminares de otras misiones internacionales —incluidas las de la OEA, el Carter Center y la asociación civil Transparencia— han señalado diagnósticos en la misma línea.

Por su parte, en un hecho inédito que da cuenta de la magnitud del problema, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, denunció el viernes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso la existencia de graves irregularidades en la ONPE durante las elecciones del 12 de abril. Atribuyó la crisis a fallas logísticas del organismo y desmintió su versión sobre la custodia de cédulas electorales. Según Burneo, hubo incumplimientos en el despliegue del material, lo que obligó a extender la jornada electoral y derivó en miles de incidencias y decenas de solicitudes de nulidad. También mencionó la pérdida y el abandono de actas y cédulas de sufragio en diferentes distritos de Lima.

En un contexto de competencia extraordinariamente estrecha por el segundo lugar en la elección presidencial —y de asignación de escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde variaciones marginales pueden alterar la distribución de curules—, estas fallas que constituyen pruebas irrefutables de la incompetencia de la ONPE adquieren una relevancia crítica cuya gravedad podría intensificarse en los próximos días.

La narrativa del “error puntual” e “involuntario” y sus límites

Frente a este cuadro, la respuesta institucional ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, optó al inicio de la semana por minimizar lo ocurrido, calificándolo como un “error puntual”. Tras las denuncias del presidente del JNE, funcionarios de la ONPE sostuvieron que se trató de un “error involuntario”, atribuido a que el personal encargado del traslado del material electoral habría olvidado las cajas en el vehículo utilizado para su transporte.

Sin embargo, más allá de estas respuestas superficiales, los hechos muestran una realidad distinta. La demora en la instalación de mesas, especialmente en Lima, provocó que un número indeterminado — aunque potencialmente decisivo— de ciudadanos abandonara los centros de votación sin ejercer su derecho. En una elección presidencial definida por márgenes mínimos, y en comicios legislativos donde cada voto incide en la asignación de escaños, estos episodios difícilmente pueden considerarse marginales.

Vista en su conjunto, la cadena de fallas evidencia graves deficiencias y negligencia en la gestión de la ONPE. Más preocupante aún, pone en cuestión la capacidad de la autoridad electoral para conducir con credibilidad la etapa más delicada del proceso: la segunda vuelta. En este contexto, crecen las voces —desde el ámbito político, empresarial y mediático— que demandan la salida de Corvetto, una decisión que corresponde a la Junta Nacional de Justicia, ante la pérdida de confianza en su capacidad para organizar un balotaje que se anticipa altamente tensionado.

Lo que sabemos: algunas certezas en medio de la incertidumbre

A las 9 de la mañana de este sábado 18 de abril, con el 93.414% de las actas contabilizadas por la ONPE (información extraída de su sitio oficial) hay algunas certezas que ya pueden establecerse.

La primera es que habrá segunda vuelta el próximo 7 de junio para definir la elección presidencial.

La segunda es que Keiko Fujimori (líder del derechista partido Fuerza Popular) sigue posicionada en el primer lugar con el 17,056% de los votos (2.687.330 votos), consolidando, en los hechos pero aun no de manera oficial, su pase al balotaje.

La tercera es más estructural: el liderazgo de los candidatos es débil. Incluso sumados, los dos finalistas difícilmente superarán el 30% del voto válido, reproduciendo así un patrón de baja legitimidad de origen ya visible en 2021.

Y la cuarta —quizá la más importante en términos de gobernabilidad— es que quien resulte electo presidente no contará con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras del nuevo Congreso bicameral, lo que anticipa un escenario de negociación permanente.

Lo que aún no sabemos: una definición todavía abierta

La principal incógnita sigue siendo quién competirá con Fujimori en el balotaje de junio.

La disputa entre Roberto Sánchez (del izquierdista partido Juntos por el Perú, cercano al ex presidente Pedro Castillo) y Rafael López Aliaga (del derechista partido Renovación Popular) continúa siendo extraordinariamente estrecha. La diferencia entre ambos se mide en miles —no en cientos de miles— de votos, y permanece expuesta a variaciones tanto por el conteo pendiente como por la revisión de las actas observadas.

Con el 93.414% de las actas contabilizadas, el segundo lugar de momento lo ocupa Roberto Sánchez con el 12,007% (1.891.836 votos), seguido muy de cerca por Rafael López Aliaga, quien alcanza el 11,921% (1.878.212 votos).

La lectura de estos datos es clara: Sánchez mantiene, por ahora, una ventaja de aproximadamente 13.000 votos, un margen mínimo en términos electorales y altamente vulnerable a variaciones en el cómputo final.

Sin embargo, el elemento central de esta actualización no está en los porcentajes actuales, sino en lo que aún falta por resolverse.

Si bien restan únicamente 358 actas por procesar (0,385%), persiste un volumen significativamente alto de incertidumbre: 5.752 actas observadas, equivalentes al 6.201% del total de votos que deberán ser revisadas por la justicia electoral. Este proceso estará a cargo, en primera instancia, de los Jurados Electorales Especiales y, en última instancia, del Jurado Nacional de Elecciones. Para decirlo en corto, el segundo puesto para el balotaje se decidirá en los tribunales de la justicia electoral. Y la decisión — es decir la resolución final acerca de las actas impugnadas— no llegará de manera rápida.

Lo que preocupa: legitimidad y desafección ciudadana

Más allá de quién termine ocupando el segundo lugar, el verdadero problema reside en el contexto en que esa definición se produce.

El proceso ha sufrido un deterioro significativo en términos de credibilidad. La cadena de fallas logísticas, sumadas a las denuncias de fraude —aunque no respaldadas hasta ahora por evidencia concluyente—, más las críticas del JNE a la ONPE han erosionado la confianza en la competencia de esta última institución y en su Jefe

A ello se añade un dato particularmente revelador: el muy alto volumen de votos en blanco y nulos. Los 2.199.063 votos en blanco y los 945.053 votos nulos (que en conjunto suman más de 3 millones de votos), superan ampliamente el caudal obtenido por cualquier candidato individual. No se trata de un dato anecdótico, sino de una señal estructural de desafección, frustración y rechazo frente a la oferta política.

En otras palabras, el problema no es solo quién gana, sino cuántos ciudadanos sienten que ninguno los representa.

Gobernabilidad: el desafío estructural

Sea cual sea el desenlace final, el próximo presidente enfrentará un entorno extraordinariamente complejo y desafiante.

Según los resultados preliminares de la ONPE, la nueva configuración del Senado reflejaría una fragmentación en seis fuerzas políticas: Fuerza Popular (Keiko Fujimori); Juntos por el Perú (Roberto Sánchez); Renovación Popular (Rafael López Aliaga); el Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto); el Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont); y Ahora Nación (Alfonso López Chau).

Las dos principales fuerzas de derecha —Fuerza Popular y Renovación Popular— alcanzarían en conjunto 30 de los 60 escaños (22 y 8, respectivamente): la mitad exacta del Senado, pero sin mayoría propia. Este equilibrio convierte al Partido del Buen Gobierno, con 8 senadores, en un actor bisagra con capacidad de arbitraje. Las restantes fuerzas completan un mapa que obliga a una lógica de negociación permanente.

En la Cámara de Diputados (130 miembros), la fragmentación sería similar, pero sin que ningún bloque alcance la mayoría absoluta de 66 escaños, lo que refuerza la necesidad de coaliciones amplias y estables.

Este diseño adquiere especial relevancia según quién llegue a la Presidencia. Un eventual gobierno de Roberto Sánchez, por ejemplo, dependería críticamente de acuerdos con al menos tres fuerzas adicionales para alcanzar mayorías funcionales tanto en el Senado como en Diputados.

Los datos preliminares de la ONPE apuntan a un Congreso con un número menor de fuerzas que el actual —aunque con la incorporación de algunas nuevas—, pero igualmente sin mayorías claras y con una estructura que regresa luego de tres décadas al bicameralismo. En este contexto, la gobernabilidad no descansará en la hegemonía de un bloque, sino en la capacidad de construir acuerdos en un sistema altamente fragmentado y con escasa tradición de articulación a través de alianzas y coaliciones.

Perú sigue en pausa con un final abierto

Perú no enfrenta simplemente una elección compleja. Enfrenta una elección frágil, tensionada y crecientemente cuestionada.

El país se acerca al desenlace de la primera vuelta sin certezas: con denuncias de irregularidades, dudas acumuladas, autoridades electorales bajo presión.

Los resultados siguen abiertos. Y el balotaje —que se anticipa altamente tenso— será una prueba decisiva para la capacidad del sistema electoral de procesar el conflicto, producir certeza y reconstruir la confianza.

Lo que está en juego no es solo quién gana, sino la credibilidad del proceso que debe otorgar una legitimidad de origen incuestionable a las nuevas autoridades.

Radar Político



Chile: A un mes del inicio del gobierno de José Antonio Kast, el balance político aparece profundamente dividido entre oficialismo y oposición. Desde el Ejecutivo y sus aliados se destacan avances iniciales pese a un contexto adverso, marcado —según sostienen— por la resistencia de sectores opositores y episodios de violencia política. Parlamentarios del oficialismo subrayan progresos en materia económica, con la próxima discusión de un ambicioso paquete de reactivación y empleo, así como medidas en migración irregular, como la construcción de barreras en el norte. También destacan señales de orden institucional, iniciativas en seguridad —como el rol de Gendarmería— y políticas orientadas al alivio económico y la reconstrucción. En este marco, argumentan que el Gobierno ha logrado encauzar prioridades clave, pese a heredar una economía tensionada y un aparato estatal desordenado. La oposición, en contraste, ofrece una evaluación crítica y califica la gestión como errática e insuficiente frente a las expectativas generadas en campaña.

Legisladores cuestionan el alza de los combustibles y sus efectos inflacionarios, así como la falta de avances concretos en seguridad y control migratorio, más allá de anuncios como la zanja fronteriza. También critican decisiones controversiales, como destituciones en cargos clave y la gestión de decretos, interpretándolas como señales de improvisación. Desde esta perspectiva, el Gobierno no habría cumplido sus principales promesas en economía, seguridad y migración, configurando un inicio débil que, según la oposición, no logra responder a las demandas más urgentes de la ciudadanía.

🌐 Política - La Tercera

Chile: A un mes de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, la última encuesta Plaza Pública Cadem refleja un deterioro en las expectativas ciudadanas, con un 52% de los encuestados señalando que la actual administración ha sido peor de lo que esperaban, frente a un 33% que considera que ha cumplido con lo previsto y apenas un 14% que la evalúa mejor de lo anticipado. La percepción negativa es particularmente marcada entre quienes se identifican con la izquierda, mientras que entre los sectores de derecha se observa una valoración más favorable. En paralelo, la evaluación presidencial muestra estabilidad relativa: un 42% aprueba la gestión de Kast y un 53% la desaprueba, sin variaciones significativas respecto de la medición anterior, lo que sugiere un escenario de apoyo limitado pero consolidado en el corto plazo. El sondeo también evidencia un cambio relevante en las prioridades ciudadanas, con la economía y el empleo posicionándose como la principal preocupación (65%), desplazando a la seguridad, que había dominado la agenda en los últimos años y ahora cae al segundo lugar (56%). Otros temas como inmigración, salud y vivienda pierden peso relativo en la percepción pública. En cuanto a la evaluación por áreas de gestión, los mejores resultados se observan en política internacional, defensa e inmigración, mientras que los mayores niveles de desaprobación se concentran en delincuencia, economía, medioambiente, educación y comunicaciones del gobierno. En conjunto, los datos reflejan un inicio de mandato tensionado, donde las expectativas incumplidas y las preocupaciones económicas comienzan a configurar el clima político de los primeros meses de la administración Kast.

🌐 Cadem: 52% piensa que este Gobierno ha sido peor de lo que esperaba y economía y empleo p...

Chile: El presidente José Antonio Kast presentó en cadena nacional una megarreforma denominada “Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, compuesta por más de 40 medidas orientadas a reactivar una economía estancada durante la última década. El eje central del paquete es una profunda reforma tributaria que incluye la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, junto con incentivos a la inversión, simplificación regulatoria y contención del gasto público. El Gobierno fija metas ambiciosas hacia 2030: crecimiento cercano al 4%, desempleo en 6,5% y equilibrio fiscal. Además, el plan contempla incentivos a la repatriación de capitales, beneficios para la vivienda, reducción de impuestos a donaciones y mayor certidumbre tributaria para grandes inversiones. Kast defendió la iniciativa como “no ideológica” y como una herramienta clave para “recuperar la esperanza”, en paralelo a un balance de su primer mes centrado en seguridad, migración y disciplina fiscal. Sin embargo, la propuesta ha desatado una fuerte resistencia política y anticipa una compleja tramitación en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría. La oposición ha calificado el proyecto como una “reforma tributaria encubierta” que favorece a los sectores más ricos, cuestionando especialmente la rebaja del impuesto corporativo en un contexto de estrechez fiscal y creciente demanda social. Incluso, algunos sectores han amenazado con acudir al Tribunal Constitucional si no se divide el proyecto. A ello se suma un contexto adverso para el Ejecutivo: aumento en la desaprobación del Gobierno, percepción negativa sobre la economía

—marcada por el alza de precios— y una ciudadanía que, según encuestas, mayoritariamente apoya subir impuestos a grandes empresas, en contraste con la propuesta oficial. En este escenario, Kast busca construir apoyos incluso fuera de su coalición, mientras la oposición intenta instalar la narrativa de que se trata de un programa que beneficia a los más privilegiados en detrimento de la mayoría.

🌐 Kast presenta una “ley de reconstrucción” para que “vuelva la esperanza” a Chile: “No es una inici...

Brasil: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una extensa entrevista con *El País* desde el Palacio de Planalto en Brasilia, ofreció una mirada crítica sobre el actual desorden global y, en particular, sobre el rol de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, a quien acusó de actuar de manera unilateral y amenazante. Lula cuestionó el uso del poder económico, militar y tecnológico como herramienta para imponer reglas internacionales, subrayando que ningún país tiene derecho a intimidar a otros. En ese marco, alertó sobre un mundo “a la deriva”, con múltiples conflictos simultáneos y un gasto militar desbordado —2,7 billones de dólares en un solo año— que, en su opinión, podría destinarse a resolver problemas estructurales como el hambre o el analfabetismo. Asimismo, planteó la urgencia de reformar las instituciones internacionales, especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, al que considera obsoleto y dominado por potencias que han abandonado su rol de garantes de la paz para convertirse en actores de guerra. En el plano interno y regional, Lula defendió la fortaleza de la democracia brasileña tras el intento de golpe del 8 de enero de 2023, destacando que el país ha logrado juzgar y encarcelar a responsables, incluidos altos mandos militares. De cara a las elecciones de octubre, donde podría enfrentar a un heredero del bolsonarismo, expresó confianza en que la ciudadanía optará por la democracia pese a la polarización y al avance de la extrema derecha, alimentado —según señaló— por desinformación y uso intensivo de redes digitales e inteligencia artificial. En política exterior, reafirmó su apuesta por el multilateralismo, el libre comercio y la negociación como vía para resolver conflictos, incluyendo los casos de Ucrania y Venezuela, rechazando cualquier injerencia externa. Además, confirmó su intención de competir por un cuarto mandato, reivindicando su energía política a los 80 años y su compromiso de evitar que Brasil repita lo que considera un periodo de deterioro institucional bajo el gobierno anterior. 🌐 Lula: “Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país”

Colombia: A pocos meses de dejar el poder, el presidente Gustavo Petro advierte en una entrevista que podría haber una “rebelión” en América Latina si Estados Unidos no replantea su relación con la región, al tiempo que denuncia presiones políticas a través de mecanismos como la lista OFAC. Petro combina un discurso en defensa del multilateralismo y la lucha contra el cambio climático con fuertes críticas al sistema internacional y a la política estadounidense, aunque asegura mantener una relación “buena” con el presidente Donald Trump. En política regional, cuestiona la falta de condiciones para elecciones libres en Venezuela y sostiene que una transición requerirá tiempo, diálogo y levantamiento de sanciones. En el plano interno, Petro siembra dudas sobre la transparencia del sistema electoral colombiano, al advertir que “siempre ha habido fraude” y afirmar que reconocerá los resultados “sí, pero no el fraude”, lo que abre interrogantes sobre la legitimidad del próximo proceso electoral. También reconoce el desgaste de su Gobierno, admite errores en nombramientos clave y califica como fracaso parcial su política de “paz total”, mientras confía en que su candidato, Iván Cepeda, pueda sucederlo; de lo contrario, lo considera una derrota personal. Atribuye parte de las dificultades de su gestión a la resistencia política interna y a una justicia que, según él, atraviesa un proceso de “derechización”. Asimismo, denuncia el uso del lawfare y cuestiona el rol de sectores opositores en el bloqueo de reformas clave. En este contexto, advierte sobre los

riesgos de deslegitimación institucional y de mayor polarización en el tramo final de su mandato.

🌐 Gustavo Petro: “Habrá rebelión si Estados Unidos no replantea su política con Latinoamérica”

Colombia-Ecuador: El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, de “entregar la frontera a la mafia” en medio de una creciente crisis comercial y diplomática entre ambos países. Desde Ipiales, Petro criticó el cierre fronterizo y el aumento de aranceles impuesto por Ecuador —incluida una tasa de seguridad del 100% a productos colombianos—, argumentando que estas medidas afectan el comercio formal, frenan el tránsito de mercancías legales y fomentan el contrabando a través de rutas ilegales, particularmente en zonas como la Amazonía. Según el mandatario colombiano, esta dinámica fortalece economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y reproduce escenarios similares a los vividos en la frontera con Venezuela, donde el cierre de pasos formales impulsó el poder de organizaciones criminales. La disputa ha escalado hacia una “guerra arancelaria” que ha tensado las relaciones bilaterales, con llamados a consulta de embajadores y ausencia de diálogo directo entre ambos gobiernos. Petro calificó las decisiones ecuatorianas como “brutales e irracionales” y advirtió incluso que Colombia podría suspender el suministro de electricidad a Ecuador si no se restablece la cooperación. Por su parte, Noboa defendió las medidas como necesarias para proteger la economía y la seguridad de su país, reclamando reciprocidad y señalando que la relación podría mejorar tras las próximas elecciones en Colombia. El conflicto, que también tiene antecedentes políticos y diplomáticos previos, ha abierto la puerta a escenarios de mayor aislamiento bilateral, mientras Petro busca apoyo internacional e incluso plantea redirigir exportaciones hacia Venezuela, en un contexto donde la frontera se convierte en un foco crítico de tensiones económicas, seguridad e influencia de redes ilícitas.

🌐 Gustavo Petro acusó a Daniel Noboa de “entregar la frontera a la mafia”, en medio de la crisis co...

Argentina: El gobierno del presidente Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más complejos en la segunda mitad de su mandato, atrapado en una serie de cinco conflictos que erosionan su capital político pese a la ausencia de adversarios con capacidad real de disputarle el poder. Estos problemas incluyen escándalos éticos —como el denominado “AdorniGate” y otros casos vinculados a funcionarios— que contradicen el discurso oficial, una deficiente gestión comunicacional en contextos de crisis, disputas internas persistentes en la cúpula del poder, una dinámica de aislamiento en la toma de decisiones y una economía que no logra traducir sus logros macroeconómicos en mejoras tangibles para la mayoría de la población. La combinación de estos factores ha debilitado la narrativa oficial y generado un creciente desgaste en la imagen del gobierno, reflejado en indicadores de irritación social y en encuestas recientes. En paralelo, la interna entre figuras clave del oficialismo, junto con una estructura cerrada y poco permeable a críticas, ha dificultado la capacidad de reacción frente a los problemas. A esto se suma un contexto económico en el que, pese a expectativas de mejora, amplios sectores de la sociedad experimentan caída del consumo, deterioro de sus condiciones de vida y creciente malestar. El propio Milei ha reconocido que muchos ciudadanos no están mejor, aunque mantiene sin cambios el rumbo económico, confiando en una recuperación futura. Sin embargo, el desgaste de las expectativas —principal sostén político del gobierno— y la persistencia de tensiones internas y escándalos configuran un escenario donde las distintas “trampas” se retroalimentan, poniendo en cuestión la sostenibilidad del proyecto oficial en el mediano plazo. 🌐 Cinco trampas de las que Milei no logra salir

Venezuela: Con el aval de Washington, Delcy Rodríguez cumple cien días como presidenta encargada en un contexto marcado por ajustes económicos alineados con exigencias externas y una reconfiguración del estilo de poder. En este período, el chavismo ha moderado su simbología tradicional —dejando atrás la estética asociada a Hugo Chávez— para adoptar una imagen más tecnocrática y corporativa, en línea con el reposicionamiento de Rodríguez como una figura de “autoritarismo moderado”. Más allá de lo estético, se han impulsado reformas clave como una nueva Ley de Minas orientada a atraer inversión con mayor seguridad jurídica, junto con cambios institucionales como la designación de nuevas autoridades en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Paralelamente, el Gobierno ha promovido medidas económicas como aumentos salariales, posibles reformas fiscales y laborales, e incluso la apertura a privatizaciones parciales, buscando facilitar la llegada de capital extranjero en un modelo que intenta combinar mercado con control estatal. Sin embargo, pese a este giro económico y a ciertos gestos de apertura, persiste la incertidumbre central sobre una eventual transición democrática. Los indicadores muestran un balance mayoritariamente negativo: 81% en rojo en materia de avances hacia democratización, con progresos limitados en áreas como el retorno de empresas internacionales o el alivio parcial de sanciones. Mientras la población enfrenta una inflación superior al 71% y mantiene un optimismo cauteloso, continúan las protestas y persisten más de 400 presos políticos, evidenciando restricciones en libertades civiles. El modelo en consolidación apunta a una economía más abierta bajo un férreo control político, similar a esquemas como el vietnamita, donde se prioriza la estabilidad y la inversión sin ceder poder. En este escenario, el gobierno ha logrado estabilizarse y ganar tiempo, pero sin señales claras de una transformación democrática, configurando más bien una adaptación del autoritarismo que cambia de forma, pero no de fondo. [🌐 Los 100 días con Delcy: de la boina roja al blazer azul | Opinión](#)

Venezuela: El exministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien dejó el cargo hace menos de un mes tras más de una década al frente de la institución militar, ha sido designado como nuevo ministro de Agricultura Productiva y Tierras por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La decisión busca impulsar la producción agrícola, garantizar el abastecimiento interno y avanzar hacia un modelo económico más diversificado. Su salida del Ministerio de Defensa se dio en el marco de una renovación del alto mando militar, siendo reemplazado por Gustavo González López, figura proveniente de los servicios de inteligencia y señalada por violaciones a los derechos humanos. Padrino, considerado durante años un pilar del chavismo y actor clave en el equilibrio de poder interno, mantiene una posición estratégica para sostener la transición dentro del oficialismo, mostrando lealtad al núcleo dirigente conformado por los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello. El nombramiento ocurre en un contexto de tensiones dentro de las Fuerzas Armadas, marcadas por malestar interno, vigilancia sobre la oficialidad y el encarcelamiento de más de 150 militares acusados de conspiración, mientras se reclama amnistía para ellos. Padrino, sancionado por Estados Unidos y con una recompensa vigente por su captura bajo acusaciones de narcotráfico —que él rechaza—, asume ahora una cartera históricamente controlada por militares en un sector profundamente afectado por la crisis económica. Sustituye a Julio León Heredia en un momento en que el Gobierno busca reactivar el campo, tras años de declive derivados de controles de precios, expropiaciones y el deterioro de la agroindustria, aunque recientes aperturas han permitido cierta recuperación productiva. [🌐 El exministro de Defensa de Venezuela asumirá la cartera de Agricultura](#)

Nicaragua: Una ONG de derechos humanos alertó sobre una persecución sistemática contra periodistas atribuida al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se mantiene de forma

sostenida desde 2018 y ha adquirido un carácter transnacional. Según el informe, la represión combina mecanismos judiciales, vigilancia física y campañas de hostigamiento digital, afectando tanto a comunicadores dentro del país como a aquellos en el exilio. Solo entre enero y marzo de 2026 se registraron 44 agresiones contra periodistas y medios independientes, en su mayoría dirigidas a personas físicas, mediante ataques verbales, escritos y digitales. La estrategia estatal, de acuerdo con las organizaciones denunciadas, busca debilitar el ejercicio del periodismo independiente y restringir el acceso a información crítica. El informe también destaca que al menos 54 medios de comunicación han sido cerrados desde 2018, incluidos algunos allanados y confiscados, lo que ha forzado a más de 300 trabajadores de prensa a abandonar el país o ser desterrados. Los periodistas exiliados enfrentan además condiciones de alta precariedad, con dificultades migratorias y limitaciones en el acceso a servicios básicos, mientras continúan siendo objeto de campañas de desacreditación desde Nicaragua. La represión digital se ha intensificado como mecanismo de control, en paralelo a la judicialización de quienes permanecen en el país. En este contexto, Nicaragua se mantiene entre los países sin libertad de expresión, reflejando un entorno de severas restricciones, vigilancia y presión constante sobre la prensa independiente.

🌐 Una ONG alertó sobre la persecución sistemática de periodistas y el cierre de medios en Nicara...

Nicaragua: Dos décadas después del retorno al poder de Daniel Ortega junto a Rosario Murillo, la libertad de prensa en el país ha sido prácticamente desmantelada, especialmente tras las protestas de 2018, que marcaron un punto de inflexión en la represión estatal. Desde entonces, se han cerrado o confiscado al menos 61 medios de comunicación y más de 300 periodistas han sido forzados al exilio, en un contexto de creciente control del discurso público, estigmatización de la prensa y persecución sistemática. Informes recientes también documentan el cierre de más de 5.500 organizaciones de la sociedad civil, consolidando un entorno autoritario en el que cerca del 65% del país se ha convertido en un “desierto informativo”, sin presencia de periodismo independiente. Frente a este escenario, al menos 26 medios operan desde el exilio, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España, aunque lo hacen bajo condiciones precarias y bajo amenaza constante del régimen. El informe presentado por organizaciones de periodistas en el exilio y Reporteros Sin Fronteras detalla una “tríada represiva” que combina leyes de ciberdelitos, figuras de “agentes extranjeros” y acusaciones de traición a la patria para criminalizar la labor periodística dentro y fuera del país. La situación es especialmente grave para las mujeres periodistas, quienes enfrentan violencia diferenciada, incluyendo ataques sexualizados y amenazas contra sus familias. Testimonios recogidos en el informe evidencian el uso sistemático del miedo como herramienta de control, mientras figuras emblemáticas del periodismo nicaragüense advierten que la continuidad del oficio depende del exilio y del apoyo internacional. En este contexto, la comunidad internacional ha sido señalada por su limitada capacidad de respuesta frente al deterioro democrático, en un país donde la represión, el fraude electoral y la ausencia de Estado de derecho configuran uno de los escenarios más restrictivos para la libertad de prensa en América Latina.

🌐 Dos décadas sin libertad de prensa en Nicaragua bajo la dictadura de Ortega y Murillo

Guatemala: La actual fiscal general, Consuelo Porras, avanzó a la etapa decisiva del proceso de selección tras obtener 92,33 puntos en la evaluación técnica realizada por la comisión de postulación. El resultado, aprobado por mayoría, la posiciona como la segunda mejor calificada entre los aspirantes, solo por detrás de Brenda Muñoz Sánchez, y le permite seguir en carrera para un nuevo mandato de cuatro años. De los 48 postulantes iniciales, solo un grupo reducido ha sido

evaluado hasta ahora, y únicamente cinco candidatos —incluida Porras— han superado el umbral mínimo de 75 puntos necesario para integrar la nómina final que será votada. La puntuación de Porras se sustenta principalmente en su amplia trayectoria profesional —más de 27 años como abogada y su gestión desde 2018 como jefa del Ministerio Público—, así como en su formación académica y experiencia docente. Sin embargo, su candidatura no está exenta de cuestionamientos, como la objeción sobre su tesis doctoral y la ausencia de publicaciones académicas reconocidas, aunque estos elementos no afectaron su calificación final. El proceso continúa con la definición de una lista de seis candidatos, en un contexto donde la comisión busca completar la nómina definitiva para la elección del próximo fiscal general. La votación final será clave para definir la continuidad o cambio en la conducción del Ministerio Público. Además, el avance de Porras confirma su posición como una de las figuras más competitivas dentro del proceso. El resultado también refleja el peso de la experiencia institucional en los criterios de evaluación aplicados por la comisión.

🌐 María Consuelo Porras recibe una nota de 92.33 puntos, y pasa a ser elegible para la nómina de ...

Guatemala: La Corte Suprema de Justicia anuló las órdenes de captura emitidas contra el exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, al considerar que fueron “ilegales” y producto de una extralimitación de funciones de un tribunal de apelaciones. La decisión revierte una resolución previa que había ordenado su persecución penal en el marco de investigaciones por el caso Odebrecht, y también beneficia a otros exfuncionarios anticorrupción, como la exfiscal general Thelma Aldana y el exjefe de la FECCI, Juan Francisco Sandoval. Aunque algunos aún enfrentan procesos abiertos, el fallo elimina la condición de “rebeldes”, lo que les permite ejercer su defensa. La resolución ha sido interpretada como un posible punto de inflexión en un sistema judicial que en los últimos años ha sido cuestionado por perseguir a quienes lideraron investigaciones contra la corrupción. El fallo ocurre en un contexto de deterioro institucional marcado por la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, bajo cuya administración se desmantelaron avances clave en la lucha contra la impunidad y se forzó al exilio a decenas de fiscales, jueces y periodistas. La salida próxima de Porras ha reavivado expectativas de cambio entre los operadores de justicia desplazados, quienes ven en esta decisión una señal de posible reversión de los procesos de criminalización en su contra. Al mismo tiempo, el presidente Bernardo Arévalo ha descartado la continuidad de Porras en el cargo, en medio de cuestionamientos internacionales y sanciones por corrupción, lo que podría abrir una nueva etapa en el sistema judicial guatemalteco y en los esfuerzos por restablecer el Estado de derecho.

🌐 La Corte de Guatemala anula las órdenes de captura contra el colombiano Iván Velásquez, pers...

Radar Electoral



Perú: El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, confirmó que se habían detectado irregularidades previas dentro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales antes de la jornada del 12 de abril, marcada por una grave crisis logística que dejó a más de 52.000 ciudadanos sin poder votar. Burneo desmintió la versión oficial sobre el

hallazgo de cédulas electorales en Surquillo, asegurando que no hubo cadena de custodia ni acompañamiento policial o del JNE, y calificó como “falsa” la información difundida por la ONPE, lo que derivó en la apertura de investigaciones y posibles acciones legales. Durante su presentación ante el Congreso, atribuyó la crisis a fallas logísticas de la ONPE —especialmente en el despliegue de material informático— y no a empresas contratistas, como se había señalado inicialmente. Detalló que el organismo electoral no cumplió con los plazos comprometidos, obligando a extender la jornada electoral e incluso a habilitar votaciones al día siguiente en algunas circunscripciones. Asimismo, reveló que se registraron más de 24.000 incidencias, cerca de 1.000 durante la jornada, y al menos 85 pedidos de nulidad, reflejando la magnitud de la crisis en el proceso. En paralelo, la ONPE reconoció errores en la información entregada, pidió disculpas públicas e inició investigaciones internas, incluyendo la suspensión de un alto funcionario vinculado al despliegue electoral. También se corrigieron versiones previas sobre la custodia de material electoral, admitiendo inconsistencias. Este episodio ha profundizado la crisis de confianza en el sistema electoral peruano, en un contexto de alta tensión política y creciente judicialización del proceso.

🌐 [Presidente del JNE desmiente a la ONPE sobre cédulas halladas en la calle: todo lo que reveló e...](#)

Perú: El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros cuatro funcionarios enfrentan una denuncia penal que podría derivar en penas de hasta ocho años de prisión por presuntos delitos electorales, tras fallas en la distribución de material que impidieron votar a más de 52.000 ciudadanos. Según el procurador del Jurado Nacional de Elecciones, Ronald Angulo, existió una clara omisión de funciones y deficiencias en la planificación, al no verificarse adecuadamente la capacidad operativa de la empresa encargada del traslado. La acusación incluye tanto la omisión de deberes funcionales como la afectación directa del derecho al sufragio, en un contexto donde los retrasos logísticos alteraron el normal desarrollo de los comicios. El caso se encuentra en fase de investigación y será la justicia la que determine eventuales responsabilidades penales. La controversia también involucra a la empresa contratada para el transporte del material electoral, que rechazó haber incumplido sus obligaciones y atribuyó las demoras a factores ajenos a su gestión. En paralelo, las consecuencias políticas y administrativas ya se han hecho visibles, con la detención de un alto funcionario de la ONPE y el aumento de cuestionamientos sobre la gestión del proceso electoral. El episodio pone en evidencia debilidades estructurales en la organización logística de las elecciones y abre un nuevo frente de tensión institucional, en un contexto electoral ya marcado por incertidumbre y desconfianza en el sistema.

🌐 [Jefe de ONPE y cuatro funcionarios podrían recibir hasta 8 años de cárcel por delitos electorales...](#)

Colombia: A pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el proceso electoral se ve ensombrecido por una ola de amenazas contra candidatos, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad y la integridad democrática. La candidata Paloma Valencia fue blanco de intimidaciones tras circular en redes sociales una imagen de una corona fúnebre con su nombre, hecho que generó una fuerte reacción del expresidente Álvaro Uribe, quien denunció un patrón de violencia política. Otros aspirantes, como Abelardo de la Espriella, también reportaron amenazas similares, en un contexto marcado por antecedentes graves, como el atentado de 2025 contra el precandidato Miguel Uribe, que terminó con su fallecimiento. Según la Misión de Observación Electoral, el año pasado se registraron más de 100 agresiones contra actores políticos, reflejando un deterioro preocupante del clima electoral. El Gobierno ha respondido con medidas para reforzar la seguridad, incluyendo una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información

que permita identificar a los responsables y la instrucción a la Fiscalía para investigar los hechos. Asimismo, la Unidad Nacional de Protección anunció el fortalecimiento de los esquemas de seguridad para los 14 candidatos presidenciales. Autoridades y distintos sectores políticos han enfatizado la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio democrático, advirtiendo que estas amenazas constituyen un riesgo directo para la estabilidad institucional. En este contexto, crece la presión sobre el Ejecutivo para asegurar un proceso electoral libre de violencia, en un país donde la historia reciente aún pesa sobre la seguridad de quienes participan en la competencia política.

🌐 Amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia encienden alarmas cuando falta poco ...

Colombia: La campaña del senador Iván Cepeda avanza en su estrategia de ampliar apoyos hacia el centro político con miras a las elecciones presidenciales, apostando por un eventual acuerdo con la Alianza Verde. Aunque aún no existe una adhesión formal, la dirección del partido ha decidido priorizar la afinidad programática con las reformas sociales del actual Gobierno por sobre sus divisiones internas y recientes escándalos. Para ello, se ha conformado una comisión encargada de negociar un acuerdo programático que incorpore propuestas de los verdes, en línea con la construcción de una coalición más amplia —la denominada “Alianza por la Vida”— que ya incluye sectores como el liderado por Juan Fernando Cristo. En este contexto, Cepeda, quien lidera las encuestas, busca consolidar una base electoral suficiente para competir con candidatos de derecha como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el principal obstáculo para concretar la alianza es la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, impulsada por el presidente Gustavo Petro, que genera amplio rechazo dentro de la Alianza Verde. Dirigentes del partido han dejado claro que no respaldarán esa iniciativa, pese a coincidir en otros aspectos con la agenda progresista. Esta tensión refleja no solo las diferencias ideológicas internas del Verde —que agrupa corrientes desde la centroizquierda hasta sectores más cercanos a la derecha— sino también los límites de la estrategia de expansión de la izquierda, que necesita atraer votos moderados sin generar incertidumbre política o económica. En este escenario, Cepeda intenta equilibrar su cercanía con el oficialismo y la necesidad de ofrecer garantías al electorado de centro, mientras la construcción de alianzas se convierte en un factor decisivo para definir el rumbo de una contienda marcada por la fragmentación y la polarización.

🌐 La campaña de Iván Cepeda prepara la llegada de los verdes, con la Constituyente como último ...

Colombia: El candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella ha convertido su relato de “ateo arrepentido” en el eje central de su campaña, logrando consolidar un creciente respaldo entre el electorado evangélico, un segmento clave de cara a las elecciones. Su narrativa de conversión —que atribuye a una experiencia personal tras una tragedia familiar— es presentada como genuina, aunque sus críticos la interpretan como una estrategia para captar el voto religioso. Apoyado por pastores influyentes y líderes de mega iglesias, así como por el partido cristiano Colombia Justa Libres, el candidato ha logrado posicionarse entre el segundo y tercer lugar en las encuestas. Su discurso incorpora referencias bíblicas, como la figura de Ciro el Grande, con la que se identifica como un líder elegido para cumplir una misión, conectando así con la idea cristiana de redención y propósito divino. El ascenso de De la Espriella entre sectores religiosos se sustenta no solo en su narrativa simbólica, sino también en una agenda conservadora clara: defensa de la familia tradicional, oposición al aborto y rechazo a la llamada “ideología de género”, enmarcada en una “batalla cultural” contra el progresismo y el gobierno de Gustavo Petro. Su cercanía con líderes religiosos de gran influencia, como el pastor Miguel Arrázola, ha sido clave para movilizar apoyos y

otorgar credibilidad a su candidatura, en un contexto de desconfianza de estos sectores hacia partidos tradicionales. Además, su coherencia con estas banderas lo diferencia de otras candidaturas de derecha, reforzando su atractivo electoral. Esta combinación de fe, discurso conservador y respaldo religioso ha permitido a De la Espriella capitalizar políticamente la demanda de representación de los creyentes, consolidando una estrategia que, más allá de su autenticidad, está demostrando ser eficaz en términos electorales.

🌐 Abelardo de la Espriella capitaliza su discurso como ateo arrepentido para conquistar el voto eva...

Venezuela: La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática ha intentado colocar la celebración de elecciones en el centro de la agenda política, presentando una hoja de ruta orientada a la estabilización, recuperación y convocatoria a comicios, en un contexto marcado por la salida forzada de Nicolás Maduro del poder hace cien días. El plan, alineado en parte con la estrategia de Washington, carece sin embargo de plazos concretos y deja abiertas interrogantes sobre su implementación. María Corina Machado, líder opositora, insistió en la urgencia de elecciones “impecables” como vía para legitimar un nuevo gobierno y atraer inversiones, al tiempo que la coalición busca incidir en la política estadounidense, actualmente más enfocada en acuerdos económicos con el chavismo que en una pronta transición democrática. Pese a la presión opositora, persisten dudas sobre la viabilidad y coherencia de la estrategia, en medio de una interlocución directa entre Washington y el chavismo que ha marginado parcialmente a la oposición. El portavoz Roberto Enríquez defendió que las elecciones son condición para la estabilización, aunque evitó detallar los pasos concretos del plan, descrito más como una “agenda de lucha” que como una ruta operativa. Entre las condiciones exigidas figuran la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados, garantías de libertades civiles y la creación de un árbitro electoral independiente, además del levantamiento de inhabilitaciones. Sin embargo, la falta de señales claras de independencia institucional y la ambigüedad sobre el papel de Estados Unidos mantienen el proceso envuelto en incertidumbre, mientras el chavismo prioriza la estabilidad y el control del poder.

🌐 La oposición presiona para llevar las elecciones al centro de la agenda política venezolana

Brasil: Una nueva encuesta del Instituto Quaest introduce un elemento disruptivo en la carrera presidencial brasileña al ubicar por primera vez a Flávio Bolsonaro por delante de Luiz Inácio Lula da Silva en un escenario de segunda vuelta. El senador e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro alcanza el 42% de la intención de voto frente al 40% del actual mandatario, en lo que constituye un empate técnico pero con una tendencia favorable al bolsonarismo. El sondeo, realizado entre el 9 y el 13 de abril sobre 2.004 entrevistados, refleja una progresiva erosión de la ventaja de Lula: de una diferencia de 10 puntos en diciembre, esta se redujo a 7 en enero, 5 en febrero y un empate en marzo, hasta revertirse levemente en abril. No obstante, en primera vuelta Lula mantiene el liderazgo con el 37%, seguido por Flávio Bolsonaro con el 32%, mientras que otros candidatos aparecen muy rezagados. El estudio también muestra que Lula conservaría ventaja frente a otros contendores en un eventual balotaje, lo que subraya que su principal vulnerabilidad se concentra exclusivamente en la confrontación con el bolsonarismo. En paralelo, los niveles de rechazo siguen siendo elevados para ambos: 55% en el caso de Lula y 52% para Bolsonaro, aunque este último ha logrado reducir su rechazo reciente. Entre votantes independientes, Flávio Bolsonaro también aventaja al presidente por siete puntos. En cuanto a la evaluación del gobierno, un 52% desaprueba la gestión de Lula frente a un 43% que la aprueba, mientras crece la percepción negativa sobre la economía, con la mitad de los encuestados evaluándola desfavorablemente y un 72% señalando aumentos en los

precios de los alimentos. A pesar de que muchos votantes ya han definido su preferencia, persiste un margen relevante de electores que podría cambiar su decisión antes de octubre.

🌐 Elecciones en Brasil: una nueva encuesta colocó a Flávio Bolsonaro por delante de Lula da Silva ...

Ecuador: El adelanto de las elecciones locales a noviembre de 2026, decidido por el Consejo Nacional Electoral, ha reconfigurado abruptamente el escenario político al obligar a los partidos a acelerar definiciones internas en medio de fuertes restricciones legales. La medida, justificada por el posible impacto del fenómeno de El Niño, pone en juego alcaldías, prefecturas y otros cargos clave, pero afecta especialmente al correísmo, principal fuerza opositora, cuya organización — Revolución Ciudadana— se encuentra suspendida por nueve meses por una investigación por presunto lavado de activos. A esto se suma la situación judicial de varios de sus líderes, algunos con procesos abiertos o incluso en prisión preventiva, lo que limita seriamente su capacidad de competir. El resultado es una oposición debilitada, obligada a actuar con cautela y sin claridad sobre candidaturas o alianzas, en un contexto de creciente incertidumbre política. El nuevo calendario electoral ha profundizado la fragmentación del sistema de partidos, transformando la contienda en un “mercado de siglas” donde las alianzas pragmáticas reemplazan la identidad ideológica. Movimientos tradicionales y figuras políticas abren sus estructuras para acoger candidatos de distintas corrientes, reflejando la debilidad institucional de los partidos, muchos de los cuales luchan por sobrevivir electoralmente. Incluso fuerzas como Pachakutik, con fuerte base territorial, enfrentan divisiones internas que amenazan su cohesión. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa defiende la medida al considerar que garantiza condiciones más equitativas de competencia, en un escenario donde el adelanto electoral no solo acelera los tiempos políticos, sino que redefine el equilibrio de poder y deja a la oposición en una posición particularmente vulnerable.

🌐 El adelanto electoral en Ecuador sacude el tablero político y arrincona a la oposición

México: La anticipación de la elección intermedia de 2027 ha desatado una temprana reconfiguración política en el país, con impactos directos en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha exigido a los funcionarios interesados en competir por cargos públicos que abandonen sus posiciones en el Gobierno. Con más de un año de antelación, los partidos ya han activado sus procesos internos para definir candidaturas en un escenario que incluye la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y múltiples cargos locales. En este contexto, las autoridades electorales muestran una capacidad limitada para frenar prácticas que antes eran sancionadas, como las campañas anticipadas, mientras se difumina la frontera entre función pública y proselitismo. La presidenta ha sido categórica al señalar que no se puede ejercer simultáneamente como servidor público y candidato, buscando contener una dinámica arraigada en el sistema político mexicano. La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas, tras meses de actividad proselitista y en medio de un escándalo de corrupción vinculado al contrabando de combustibles, marca el inicio de esta ola de recambios. Casos similares, como los de Santiago Nieto y el diputado Arturo Ávila, reflejan la expansión de campañas encubiertas en distintos niveles del oficialismo. Morena ha institucionalizado mecanismos como la figura de “coordinadores de la Transformación” para adelantar la competencia interna sin infringir formalmente la ley, arrastrando a la oposición a replicar estas prácticas. Este escenario, heredero de la estrategia utilizada en las elecciones de 2024, plantea un desafío para la equidad electoral y pone a prueba la capacidad del Gobierno para ordenar sus filas, en un contexto donde la competencia política se intensifica y los

incentivos para el uso de recursos públicos con fines electorales siguen presentes.

🌐 La elección anticipada de 2027 abre una etapa de bajas y recambios en el gabinete de Sheinbaum

México: El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lanzó desde San Luis Potosí una señal de autonomía política al anunciar que está preparado para competir en solitario en las elecciones de 2027, incluso sin el respaldo de Morena, su principal socio en la coalición oficialista. La dirigencia nacional, encabezada por Karen Castrejón, utilizó el arranque de los trabajos electorales para reafirmar esta estrategia, evocando el precedente de 2021, cuando Ricardo Gallardo ganó la gubernatura sin el apoyo morenista y luego se alineó con la Cuarta Transformación. El nuevo escenario apunta a replicar esa fórmula, con la senadora Ruth González Silva —esposa del actual gobernador— como principal aspirante, en medio de tensiones por la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el nepotismo. Aunque Morena ha intentado cerrar la puerta a sucesiones familiares desde 2027, el Verde ha buscado sortear estas restricciones mediante ajustes legales locales y una estrategia política propia. El movimiento del PVEM no necesariamente implica una ruptura con la coalición gobernante, sino una forma de maximizar su poder negociador y electoral dentro del oficialismo. San Luis Potosí se ha consolidado como un bastión clave de la Cuarta Transformación bajo liderazgo verde, con resultados contundentes en elecciones recientes, lo que refuerza la viabilidad de una candidatura independiente del partido. La posible postulación de Ruth González, respaldada por encuestas favorables y el aparato partidario, refleja la intención de consolidar una sucesión política controlada, pese a críticas y vetos previos como el de la llamada “Ley Esposa”. En este contexto, el Verde también proyecta candidaturas propias en otras entidades, ampliando su influencia territorial. El desafío radica en equilibrar esta autonomía con la cohesión del bloque oficialista, en un escenario donde la competencia interna y las reglas sobre sucesión política podrían tensionar la relación con Morena sin necesariamente fracturarla.

🌐 El Partido Verde lanza un desafío a Morena desde San Luis Potosí: “Estamos listos para ganar so...”

Radars Económico-Social



Venezuela: A cien días del ataque de Estados Unidos que provocó la caída de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, el país atraviesa un giro político y económico sin precedentes, definido por las autoridades como “un nuevo momento político” más que una transición. En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostiene que la prioridad absoluta es la recuperación económica tras años de sanciones, hiperinflación y deterioro institucional. El Gobierno de Delcy Rodríguez ha impulsado reformas aceleradas —especialmente en hidrocarburos y minería— para atraer inversión extranjera, al tiempo que mantiene una relación pragmática de cooperación con la administración de Donald Trump, enfocada en el levantamiento progresivo de sanciones y el impulso a la producción petrolera. Paralelamente, se ha aprobado una ley de amnistía que ha liberado a miles de presos, aunque persisten restricciones políticas, mientras el chavismo busca recomponer su base de apoyo frente a una oposición encabezada por María Corina Machado. Rodríguez evita fijar plazos para eventuales elecciones y subraya que estas dependerán de la estabilización económica, el fortalecimiento institucional y la generación de confianza en el sistema

electoral, en un contexto donde el calendario político sigue incierto. Defiende que el país no está tutelado por Estados Unidos, aunque reconoce una cooperación orientada a atraer inversiones y modernizar sectores estratégicos, incluso incorporando sugerencias de actores internacionales. El dirigente admite errores del pasado —falta de garantías políticas, corrupción y polarización extrema— y plantea la necesidad de diálogo y reconciliación para evitar repetirlos. En el plano interno, insiste en que el chavismo se mantiene cohesionado y que los recientes cambios institucionales responden a este “nuevo tiempo”, mientras en el plano externo se abren oportunidades de acercamiento con Europa. No obstante, el desafío central sigue siendo lograr que la mejora económica sea tangible para una población exhausta, condición que el oficialismo considera indispensable antes de avanzar hacia un proceso electoral que no reabra las tensiones del pasado.

🌐 Jorge Rodríguez: “Lo más importante ahora en Venezuela es la economía”

Venezuela: El país avanza en un proceso de normalización económica y financiera tras años de aislamiento, combinando cambios internos con señales externas de apertura. En el plano doméstico, el Gobierno anunció la reestructuración de la dirección del Banco Central de Venezuela (BCV), con la salida de Laura Guerra Angulo —familiar del círculo de Nicolás Maduro— y su reemplazo interino por el técnico Luis Alberto Pérez González. La decisión busca responder a presiones internas y externas para despolitizar la institución y recuperar credibilidad ante inversores, en un contexto de alta fragilidad macroeconómica: déficit fiscal cercano al 9% del PIB, inflación de tres dígitos (alrededor del 600%) y un tipo de cambio descontrolado. Este movimiento forma parte de un intento más amplio por desplazar a familiares del poder de posiciones clave y fortalecer la gestión técnica en áreas críticas. En paralelo, el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos a la banca pública —incluido el propio BCV— ha abierto la puerta a la reinserción del país en el sistema financiero internacional. Como resultado, el Fondo Monetario Internacional restableció relaciones con Caracas tras siete años suspendidas, mientras que el Banco Mundial también reanudó contactos. Este giro marca un punto de inflexión en la estrategia internacional hacia Venezuela y refuerza a la administración interina de Delcy Rodríguez, que busca consolidar legitimidad y acceso a financiamiento externo. Sin embargo, el retorno a los organismos multilaterales también implica mayores exigencias de transparencia y disciplina económica, en un país donde el BCV ha perdido autonomía y credibilidad durante décadas de politización.

🌐 Venezuela cambia la dirección del Banco Central para ganar credibilidad ante los inversores

Haití: Más de seis millones de personas —más de la mitad de la población— requieren ayuda humanitaria urgente en un país sumido en un colapso multidimensional, marcado por la violencia armada, el hambre y la falta de servicios básicos. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la situación es crítica y la población “está al límite”, con 1,4 millones de desplazados internos que han huido de sus hogares en un contexto donde las bandas armadas controlan hasta el 85% de Puerto Príncipe. La crisis, que se ha intensificado desde 2020 y se agravó tras la ofensiva coordinada de grupos criminales en 2024, ya no se limita a la capital, sino que se ha extendido a otras regiones del país, evidenciando un deterioro sostenido de la seguridad y el control estatal. El sistema sanitario se encuentra prácticamente colapsado, con solo un 30% de los centros de salud operativos, mientras el acceso a agua potable y alimentos es cada vez más limitado, obligando a las organizaciones humanitarias a operar en condiciones cercanas a un escenario de guerra. La asistencia depende de complejas negociaciones con actores armados para garantizar el acceso a zonas afectadas, lo que refleja la fragilidad del entorno. En paralelo, crece la preocupación por una

posible “fatiga internacional” frente a la crisis, en momentos en que se prepara el despliegue de una fuerza para combatir a las pandillas, con el riesgo de agravar aún más la situación humanitaria. Pese a este panorama, la población mantiene una resiliencia que, según los organismos internacionales, exige una respuesta sostenida y urgente de la comunidad global.

🌐 Más de seis millones de haitianos necesitan ayuda humanitaria urgente: “La población está al lím...

Colombia-Ecuador: El presidente colombiano, Gustavo Petro, dio marcha atrás en la amenaza de imponer aranceles del 100% a productos ecuatorianos y anunció que finalmente estos serán del 0%, en medio de la creciente tensión comercial con el Gobierno de Daniel Noboa. La decisión implica un cambio de estrategia, priorizando la producción interna mediante subsidios para abaratar costos y fomentar que bienes previamente importados desde Ecuador se produzcan en Colombia. Además, Petro planteó redirigir exportaciones afectadas hacia Venezuela, en un intento por mitigar el impacto de las restricciones comerciales y mantener el dinamismo productivo. El mandatario también enmarcó su decisión dentro de una visión más amplia de integración regional, rechazando escenarios de confrontación entre ambos países. No obstante, el trasfondo del conflicto se mantiene, con críticas de Petro a las medidas ecuatorianas —incluyendo el cierre fronterizo y el aumento de aranceles— por considerar que afectan el comercio formal y favorecen el contrabando y las economías ilegales en zonas como Nariño. Según el presidente colombiano, estas políticas pueden replicar dinámicas observadas en la frontera con Venezuela, donde el cierre de pasos oficiales fortaleció redes criminales. Asimismo, advirtió que las restricciones comerciales, sumadas a decisiones como el alza de tasas de interés, podrían agravar la situación económica y social en las regiones fronterizas. En conjunto, el episodio refleja un intento de desescalar la “guerra arancelaria”, aunque las tensiones estructurales entre ambos gobiernos persisten.

🌐 Petro se echó para atrás en aranceles del 100% para productos ecuatorianos: “Se producirá en ...

Colombia: La Contraloría General de la República advirtió sobre el deterioro de las finanzas públicas y la necesidad urgente de un plan de recuperación para evitar una crisis fiscal y social. Durante un foro económico, el contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que el próximo gobierno recibirá una economía altamente presionada por el crecimiento de la deuda, el bajo recaudo y múltiples obligaciones acumuladas en sectores estratégicos. El servicio de la deuda alcanzó en 2025 los 105 billones de pesos —equivalente al 23% del gasto público—, lo que reduce significativamente el espacio para inversión. A esto se suman deudas relevantes del Estado, como los 32,98 billones de pesos que deben las EPS, subsidios eléctricos pendientes por 3,8 billones y cerca de 17 billones en condenas judiciales, evidenciando una presión estructural sobre las cuentas públicas que impacta directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. El organismo de control instó a adoptar medidas inmediatas para sanear las finanzas, incluyendo depurar cuentas, reconocer pasivos y establecer un plan transparente de pago de deudas, junto con una estrategia integral para fortalecer los ingresos fiscales. Entre las recomendaciones destacan ampliar la base tributaria, combatir la evasión, mejorar la eficiencia del gasto y corregir fallas en la ejecución presupuestal, que actualmente presentan rezagos significativos. Asimismo, advirtió sobre riesgos críticos en sectores como energía —donde se requieren pagos urgentes para evitar interrupciones del servicio— y sobre el elevado pasivo en reparación a víctimas del conflicto, que supera los 130 billones de pesos. En este contexto, el contralor subrayó la importancia de mantener la disciplina fiscal, fortalecer la coordinación entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, y priorizar la confianza institucional como base para la

🌐 Las alertas de la Contraloría sobre el estado de la economía colombiana: 'Se requiere plan de re...

México: La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por apoyarse en la academia para amortiguar el costo político de su viraje hacia el uso del fracking, una decisión que contradice su postura previa y la línea histórica del oficialismo. Para ello, convocó a un comité técnico integrado por rectores y expertos de instituciones como la UNAM, el IPN y la UAM, que deberá emitir en apenas dos meses una evaluación sobre la viabilidad de esta técnica. El movimiento busca presentar el cambio de rumbo como una decisión basada en evidencia científica más que política, en un contexto donde el Gobierno pretende reforzar la soberanía energética y reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos, que actualmente cubre cerca del 75% del consumo nacional. Sin embargo, la rapidez del proceso y la exclusión de voces críticas han generado dudas sobre la independencia del comité y alimentan la percepción de que se trata más de un aval técnico a una decisión ya tomada que de un debate genuino. Las críticas provienen tanto del ámbito académico como de organizaciones ambientalistas, que cuestionan la narrativa oficial sobre la existencia de un “fracking menos dañino” o “verde”. Expertos advierten que no hay evidencia de tecnologías realmente sustentables y alertan sobre los riesgos ambientales y sociales asociados, como la contaminación del agua y las emisiones de metano. Además, se señala que el comité carece de especialistas en los impactos específicos del fracking, lo que refuerza las sospechas de simulación. En paralelo, algunos analistas apuntan a factores geopolíticos y económicos detrás del cambio de postura, vinculados al mercado energético global y a la estrategia de Estados Unidos respecto al gas. En este contexto, la academia funciona como un escudo técnico frente a una decisión eminentemente política, mientras persiste la incertidumbre sobre si el proceso logrará legitimar el giro o, por el contrario, profundizará el cuestionamiento público hacia el Gobierno.

🌐 Sheinbaum se escuda en la academia para amortiguar su viraje al ‘fracking’

México: El gobierno de Claudia Sheinbaum promulgó una reforma constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios de empresas estatales, estableciendo un tope máximo de 134 mil pesos mensuales, equivalente a la mitad del salario presidencial. La medida, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, prohíbe que cualquier servidor público pensionado reciba ingresos superiores a los del titular del Ejecutivo, en línea con la política de austeridad impulsada por la actual administración. La iniciativa fue motivada, en parte, por la revelación de casos de exfuncionarios que percibían hasta un millón de pesos mensuales en pensiones, lo que generó presión política para avanzar en la reforma. El Ejecutivo sostiene que esta decisión permitirá generar ahorros millonarios y corregir privilegios heredados en el sector público, reforzando el discurso de combate a la corrupción y desigualdad salarial. No obstante, la reforma excluye a las Fuerzas Armadas, lo que introduce un matiz en su alcance. La medida se inscribe en una estrategia más amplia de control del gasto público y reordenamiento institucional, con el objetivo de alinear las remuneraciones del Estado bajo un principio de equidad y disciplina fiscal. Al mismo tiempo, el gobierno busca enviar una señal política clara de coherencia con su narrativa de austeridad republicana, en un contexto de alta sensibilidad social frente a los privilegios de la élite pública. La implementación efectiva de la reforma será clave para medir su impacto real en las finanzas públicas y en la percepción ciudadana sobre la equidad del Estado. Asimismo, podría abrir el debate sobre otros regímenes especiales aún vigentes y sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en su conjunto.

🌐 Adiós a las pensiones doradas: Sheinbaum publica decreto para poner tope a pagos de exfuncio...

Argentina: El presidente Javier Milei defendió con firmeza su programa económico durante su intervención en el foro empresarial AmCham, pese a reconocer su malestar por el dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4% y elevó el acumulado anual a 9,4%. Ante el llamado “círculo rojo”, el mandatario atribuyó el repunte inflacionario a factores estacionales —como educación, transporte y precios de la carne— y a efectos derivados de tensiones políticas del año anterior, insistiendo en que se trata de un fenómeno transitorio. En ese marco, reiteró que la inflación retomará una senda descendente y pidió “paciencia”, subrayando que el diagnóstico económico es claro y que no habrá cambios en la política monetaria ni fiscal. El discurso, de tono confrontativo, también incluyó críticas a economistas y analistas que sugieren flexibilizar el programa, reafirmando su compromiso con el equilibrio fiscal, la no emisión y la continuidad de los recortes del gasto público. Sin embargo, el dato inflacionario tensiona la principal bandera del Gobierno y abre interrogantes sobre la sostenibilidad del proceso de desinflación. Si bien el equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo, mantiene expectativas optimistas —anticipando una mejora en los próximos meses y un ciclo de crecimiento—, diversos analistas advierten sobre señales mixtas: una actividad económica en recuperación pero heterogénea, caída en la recaudación, persistencia de inflación subyacente por encima del 2% y un deterioro en la percepción de los hogares. A esto se suman riesgos externos, como el impacto de la guerra en los precios de la energía, y factores internos vinculados a la incertidumbre electoral de 2027. En este contexto, aunque el Gobierno sostiene que el rumbo es correcto y descarta cualquier ajuste de estrategia, el escenario evidencia que la estabilización enfrenta obstáculos crecientes y que el objetivo de una desinflación sostenida aún está lejos de consolidarse plenamente.

🌐 Intendentes de La Campora reclaman a Caputo por el precio de la nafta y la ejecucion de obras ...

Chile: El Fondo Monetario Internacional puso bajo observacion la megarreforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Jose Antonio Kast, que incluye rebajas de impuestos a las empresas y la reintegracion gradual del sistema. Aunque el organismo aun analiza los detalles del proyecto —actualmente en debate en el Congreso—, anuncio el envio de una mision a Santiago para evaluar la iniciativa en el marco del informe del Articulo IV. Desde el FMI, la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Dora Iakova, advirtio que cualquier reduccion fiscal significativa debera ser cuidadosamente evaluada. El organismo enfatizo que las rebajas fiscales permanentes deben ser compensadas con aumentos de ingresos o ajustes en el gasto para evitar un deterioro de las cuentas publicas. En particular, subrayo la importancia de mantener la sostenibilidad fiscal y preservar el nivel de deuda publica por debajo del 45% del PIB, considerado un ancla clave en el caso chileno. Esta advertencia introduce un elemento de presion tecnica en el debate legislativo, anticipando tensiones entre los objetivos de crecimiento economico del gobierno y las restricciones de disciplina fiscal. Asimismo, el pronunciamiento del FMI sugiere que el diseno final de la reforma sera observado de cerca por los mercados y organismos internacionales. En este contexto, el proceso legislativo se perfila como un test relevante para la credibilidad macroeconomica del pais. La mision tecnica del FMI permitira profundizar el analisis sobre los impactos fiscales de la propuesta y su coherencia con las reglas fiscales vigentes. Ademas, el resultado del debate en el Congreso sera clave para definir el alcance final de las medidas y su viabilidad politica. Todo ello en un escenario donde Chile busca equilibrar crecimiento, inversion y estabilidad fiscal.

🌐 “Los recortes permanentes de impuestos deben ser compensados”: la advertencia del FMI ante r...

Brasil: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió al Congreso un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a cinco días, eliminando el esquema tradicional de seis días de trabajo por uno de descanso, en una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida sin afectar los salarios. La propuesta, presentada con carácter de urgencia, obliga al Legislativo a debatirla en un plazo máximo de 45 días y se enmarca en una demanda histórica de sindicatos y sectores populares, ahora convertida en una de las principales banderas del Gobierno en un año electoral. El proyecto plantea que los avances tecnológicos y el aumento de la productividad deben traducirse en más tiempo de descanso para los trabajadores, consolidando así un enfoque orientado al bienestar social y al equilibrio entre vida laboral y personal. En paralelo, la iniciativa convive con una propuesta de reforma constitucional ya en trámite sobre el mismo tema, aunque su discusión es más lenta, lo que añade complejidad al debate legislativo. Mientras tanto, sectores empresariales han manifestado preocupación por el posible impacto económico de la medida, advirtiendo que la reducción de la jornada a 40 horas semanales podría incrementar los costos laborales formales hasta en un 7% anual. En este contexto, el proyecto no solo abre un debate estructural sobre el futuro del trabajo en Brasil, sino que también refleja la apuesta política de Lula por reforzar su agenda social en un escenario electoral, equilibrando presiones entre sindicatos, sector privado y viabilidad económica.

🌐 Lula envió un proyecto al Congreso brasileño para reducir la jornada laboral a cinco días

Bolivia: El país enfrenta una crisis estructural marcada por la estanflación —caída del PIB (-3,3%) con alta inflación (20,7%)— que, según el análisis, refleja el agotamiento de su modelo económico y la ausencia de uno alternativo. La economía atraviesa una transición desordenada donde los precios han dejado de funcionar como señales, generando recesión, inflación persistente y un superávit externo engañoso. La contracción responde principalmente a la escasez de dólares, producto de la caída de exportaciones (especialmente gas), el deterioro de reservas y el limitado acceso a financiamiento. Esto ha provocado una “asfixia productiva”: falta de insumos, caída de la inversión y paralización de la actividad. A ello se suma el fin del modelo basado en consumo impulsado por subsidios y gasto público, junto con una elevada incertidumbre (brecha cambiaria de hasta 70%) que desalienta la inversión. En paralelo, la inflación responde a desorden interno, escasez y shocks externos —incluido el encarecimiento del petróleo por tensiones globales—, configurando un círculo vicioso donde cae la producción mientras suben los precios. El superávit externo no refleja fortaleza, sino una contracción forzada de importaciones por falta de divisas. Frente a este escenario, el diagnóstico del FMI y el Banco Mundial apunta a la inviabilidad del modelo actual y a la necesidad de un cambio profundo: redefinir el régimen económico, establecer un tipo de cambio competitivo, impulsar la inversión y desarrollar una estrategia exportadora. Sin estas reformas, advierte el análisis, la estanflación podría consolidarse como un estado permanente, con efectos severos sobre el empleo, el poder adquisitivo y la estabilidad social.

🌐 IOPINIÓN|Bolivia sin ancla: cuando el modelo económico se estanca en la estanflación|Carlos J...

Centroamérica: Un reciente informe del Banco Mundial advierte que el progreso en la reducción de la pobreza en Centroamérica enfrenta riesgos de estancamiento debido a la desaceleración económica, la alta informalidad laboral y la fuerte dependencia de las remesas. Aunque tras la pandemia se registraron mejoras, el crecimiento actual —entre 3% y 5%— resulta insuficiente para sostener avances sociales, especialmente en países como El Salvador, Guatemala y Honduras. La pobreza afecta entre el 25% y el 40% de la población en el norte de la región, con mayor impacto en zonas rurales e indígenas, donde el acceso a educación, salud y

servicios básicos sigue siendo limitado. El informe destaca que cerca del 83% de las personas en situación de pobreza trabaja en la informalidad y un 60% tiene bajo nivel educativo, lo que perpetúa un círculo de exclusión estructural. El Banco Mundial subraya que el crecimiento económico por sí solo no garantiza movilidad social, y propone un enfoque integral que combine políticas productivas, educativas y fiscales. Entre las recomendaciones se incluyen fomentar la formalización del empleo, mejorar la calidad educativa, ampliar la protección social y fortalecer la recaudación fiscal para generar ingresos sostenibles. También advierte sobre la vulnerabilidad que implica la dependencia de remesas frente a cambios en el contexto global. En contraste, destaca el caso de Costa Rica como ejemplo de mejores resultados gracias a la inversión en capital humano y sistemas de protección social más robustos. En conjunto, el informe concluye que romper el ciclo de pobreza en la región requiere reformas estructurales que ataquen simultáneamente la informalidad, la baja productividad y la exclusión social persistente.

🌐 La dependencia de remesas y la informalidad laboral limitan el progreso social en Centroamérica...

América Latina: La crisis en Medio Oriente ha generado un escenario paradójico para América Latina, que enfrenta el shock global desde una posición relativamente favorable en términos de exposición directa, pero con crecientes presiones macroeconómicas. La región se encuentra menos afectada por interrupciones físicas en el suministro energético, debido a su menor dependencia del petróleo de esa zona y a una mayor autosuficiencia relativa, lo que ha permitido una reacción inicial más estable en monedas, mercados financieros y rendimientos soberanos. Sin embargo, esta aparente resiliencia convive con vulnerabilidades estructurales, en particular por el impacto del alza de los precios energéticos sobre la inflación, las cuentas externas y las condiciones de financiamiento. Aunque países como Brasil, Argentina y Guyana están expandiendo su producción y ganando relevancia como proveedores energéticos, la región en su conjunto no emerge como una clara beneficiaria del contexto global. El principal canal de transmisión del shock es el precio del petróleo, que en un escenario adverso podría alcanzar niveles cercanos a los US\$130, elevando costos, presionando la inflación y dificultando la relajación monetaria. Solo un grupo reducido de países exportadores netos de energía —como Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador— podría obtener beneficios acotados, mientras que la mayoría enfrentará un deterioro en sus balanzas externas y mayores tensiones fiscales, especialmente por el costo de subsidios energéticos. A esto se suma un entorno financiero más exigente, con corporaciones altamente endeudadas, menor acceso a financiamiento internacional y riesgos sobre la calidad de activos bancarios. Si bien el sistema financiero muestra solidez relativa, el equilibrio entre resiliencia y fragilidad dependerá de la evolución del conflicto, los precios del petróleo y las condiciones globales de liquidez en los próximos meses.

🌐 La paradoja de América Latina: alivios y presiones con la crisis en Medio Oriente

Radar Inseguridad



El Salvador: El presidente Nayib Bukele sancionó una reforma constitucional que permite aplicar cadena perpetua a menores desde los 12 años, equiparando su tratamiento penal al de los adultos en delitos graves como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas. La normativa, aprobada previamente por la Asamblea Legislativa, introduce revisiones obligatorias de las condenas y crea nuevos juzgados de lo criminal —en reemplazo de los tribunales de menores— que deberán evaluar periódicamente la posibilidad de libertad controlada, con plazos que van desde 25 años de prisión para menores hasta 40 años en casos agravados. La medida se inscribe en la estrategia de mano dura del gobierno contra las pandillas, iniciada con el estado de emergencia en 2022, que ha permitido la detención de más de 91.000 personas y la suspensión prolongada de derechos constitucionales. Si bien el Ejecutivo sostiene que miles de inocentes han sido liberados, organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y han llevado el caso ante instancias internacionales. En paralelo, el oficialismo ha impulsado reformas que eliminan límites al mandato presidencial, reforzando las preocupaciones sobre la concentración de poder en el país. La reforma también endurece de manera significativa el régimen penal juvenil, que anteriormente establecía límites mucho más bajos de condena para menores. Asimismo, institucionaliza un sistema de revisiones periódicas de las penas que, aunque abre la puerta a eventuales flexibilizaciones, mantiene un enfoque altamente punitivo. En este contexto, el giro normativo profundiza el modelo de seguridad basado en el encarcelamiento masivo y la ampliación del poder punitivo del Estado.

🌐 El Salvador's Bukele signs reforms allowing life prison sentences for people as young as 12

Colombia: Un informe reciente de la Fuerza Pública revela la existencia de al menos 14 “zonas de guerra” donde distintos grupos armados ilegales se enfrentan por el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, en un contexto de creciente expansión territorial de estas organizaciones, que ya sumarían cerca de 27.000 integrantes. Estas disputas se concentran en regiones estratégicas como Nariño, Cauca, Putumayo, Chocó, Antioquia, Bolívar, Magdalena y Norte de Santander, entre otras, muchas de ellas con escasa presencia estatal. En el suroccidente, los enfrentamientos son persistentes entre disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras, en territorios con alta concentración de cultivos ilícitos, que según datos recientes alcanzan más de 253.000 hectáreas a nivel nacional. La violencia no se limita a estas zonas, sino que se extiende hacia la región Caribe, el nororiente y la Amazonía, evidenciando una dinámica de confrontación generalizada. Este escenario ocurre en paralelo a la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, que enfrenta cuestionamientos por la continuidad de la violencia y la falta de resultados concretos. Aunque las autoridades reportan avances operativos —con capturas, incautación de armas, destrucción de explosivos y golpes a economías ilícitas—, la persistencia de enfrentamientos sin intervención directa del Estado en varias zonas pone en duda la efectividad de la estrategia. A ello se suma la presión de la Fiscalía para reactivar órdenes de captura contra cabecillas que continúan delinquiendo, así como el lento avance de medidas como la fumigación con glifosato, aún en fase de pruebas. Si bien la erradicación manual de cultivos ilícitos ha mostrado un repunte, el mapa de confrontaciones refleja un país donde la violencia sigue reconfigurándose, desafiando los esfuerzos de negociación y control territorial del Gobierno.

🌐 Las 14 ‘zonas de guerra’ de los grupos armados por el control de la coca y la minería ilegal

Colombia: En Bogotá, el sicariato se ha convertido en un fenómeno dominante: cerca de la mitad de los homicidios son asesinatos por encargo. Entre enero y marzo de 2026, 134 de los 265 homicidios registrados (50,5%) corresponden a este tipo de crímenes, una proporción que ha

crecido de forma sostenida en los últimos años. Mientras antes de la pandemia representaban alrededor de 3 de cada 10 casos, hoy reflejan una transformación más profunda del crimen urbano, marcada por la competencia entre múltiples bandas por el control de economías ilícitas y corredores de droga. Este aumento se vincula también al crecimiento del narcotráfico en el país, que ha fortalecido financieramente a estas redes, permitiéndoles acceder a más armas, reclutar personal y sofisticar sus operaciones. El fenómeno responde a una lógica de “outsourcing criminal”, donde el asesinato se convierte en un servicio dentro de una red fragmentada de organizaciones, dificultando su persecución. A ello se suma el fácil acceso a armas —incluso alquiladas por cortos periodos— y la debilidad institucional, reflejada en menor capacidad de inteligencia, escasez de datos y una baja presencia policial. Expertos advierten que la estrategia de seguridad nacional no prioriza el crimen urbano, pese a su enorme impacto económico y social. Aunque se registran algunos avances en la reducción de homicidios, el sicariato sigue siendo clave para entender la violencia actual, con una expansión que trasciende territorios específicos y evidencia fallas estructurales en la respuesta del Estado. 🌐 La mitad de los homicidios en Bogotá son asesinatos por encargo

Colombia: Una investigación revela el oscuro entramado criminal detrás del ataque sicarial contra un comerciante de carnes en el norte de Bogotá, vinculándolo con la estructura de la banda transnacional ‘Los Satanás’, conocida por su accionar basado en extorsión y violencia sistemática. El atentado, ejecutado por sicarios con un modus operandi altamente organizado, se inscribe en una lógica de presión criminal sobre comerciantes, donde las víctimas son atacadas por negarse a pagar exigencias económicas ilegales. Este caso no sería aislado, sino parte de una cadena de hechos violentos conectados entre sí, lo que sugiere la existencia de redes coordinadas que operan en distintos puntos de la ciudad con patrones similares de intimidación y ejecución. Las autoridades investigan la conexión entre este ataque y otros homicidios atribuidos a la misma organización, en medio de un contexto de creciente inseguridad urbana y expansión de estructuras delictivas con posibles vínculos internacionales. La banda ‘Los Satanás’, asociada a prácticas de sicariato y extorsión, ha sido señalada en múltiples casos recientes, consolidando un esquema criminal que combina amenazas, ataques selectivos y control territorial sobre sectores comerciales. El caso pone en evidencia no solo la capacidad operativa de estas redes, sino también el desafío estructural que enfrentan las autoridades para contener la violencia y desarticular organizaciones que operan con altos niveles de coordinación e impunidad.

🌐 El oscuro nexo entre el ataque sicarial a comerciante de carnes en el norte de Bogotá y un asesi...

México: Los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “El Fresa”, han logrado mantener durante más de 20 años una estructura criminal operativa y en expansión, consolidando a la Nueva Familia Michoacana como uno de los grupos delictivos más influyentes del país. Tras el debilitamiento de la organización original, ambos retomaron el control y extendieron su dominio territorial en al menos cuatro estados —Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos—, con presencia en más de 35 municipios. Su liderazgo combina un perfil bajo y estratégico —en el caso de “El Pez”— con una visibilidad violenta atribuida a “El Fresa”, señalado por múltiples masacres y ataques contra autoridades, incluyendo asesinatos de policías y funcionarios públicos. A pesar de ser objetivos prioritarios tanto para México como para Estados Unidos —que ha ofrecido recompensas millonarias por su captura—, las autoridades no han logrado detenerlos, evidenciando la capacidad logística, territorial y operativa del grupo. La organización ha diversificado sus actividades ilícitas, incluyendo narcotráfico (con énfasis en

metanfetamina, heroína y fentanilo), extorsión, minería ilegal y robo de combustible, además de fortalecer alianzas con células locales. Casos recientes, como el secuestro del alcalde de Taxco, vuelven a poner en evidencia su poder e influencia, en un contexto donde la expansión de este grupo refleja los desafíos estructurales del Estado mexicano para contener organizaciones criminales altamente adaptativas y con fuerte arraigo territorial.

🌐 “El Pez” y “El Fresa”, 20 años de operar en impunidad; Familia Michoacana domina en 4 estados ...

Costa Rica: La expansión del narcotráfico en Costa Rica está generando un efecto colateral cada vez más visible: su infiltración en economías ilegales como la minería de oro dentro del Parque Nacional Corcovado. Redes criminales que utilizan la costa del Pacífico como ruta clave para el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa están financiando operaciones de minería ilegal en zonas protegidas para lavar sus ganancias. El aumento exponencial del tráfico —con incautaciones que superaron las 46 toneladas en 2025— ha multiplicado los flujos ilícitos, parte de los cuales se canalizan hacia estas actividades extractivas, transformando lo que antes era minería artesanal en estructuras más sofisticadas, con respaldo financiero del narcotráfico. Frente a esta amenaza, los guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación enfrentan una lucha desigual: mientras las redes ilegales cuentan con tecnología, logística y financiamiento, el Estado opera con recursos cada vez más limitados, tras recortes presupuestarios significativos. Aun así, operaciones recientes han logrado dismantelar campamentos y detener a mineros ilegales, evidenciando tanto la capacidad de respuesta como la precariedad del sistema de protección ambiental. En un contexto de precios récord del oro y creciente presión del narcotráfico, Corcovado se ha convertido en un nuevo frente donde convergen crimen organizado y degradación ambiental, anticipando un desafío estructural de largo plazo para la seguridad y la conservación en la región.

🌐 Cocaína y oro: la batalla por proteger el Parque Nacional Corcovado de Costa Rica

Costa Rica: El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica interceptó una embarcación en el Pacífico Central que transportaba 1.901 paquetes de cocaína, en un operativo que culminó con la detención de tres ciudadanos colombianos. La acción se realizó a más de 300 kilómetros de Cabo Blanco, tras una alerta sobre posible narcotráfico en alta mar. La lancha, equipada con cuatro motores y grandes reservas de combustible para largas travesías, fue localizada luego de más de 24 horas de seguimiento por unidades especializadas, en una zona clave utilizada por redes criminales para trasladar droga hacia el norte del continente. El éxito del operativo contó con apoyo aéreo de Estados Unidos, que permitió ubicar con precisión la embarcación y guiar a las autoridades costarricenses. El decomiso —equivalente a casi dos toneladas— representa un golpe significativo a las estructuras del narcotráfico que operan en rutas marítimas desde Sudamérica hacia Centroamérica y Norteamérica. Las autoridades destacan que Costa Rica sigue siendo un punto estratégico en estas redes, lo que obliga a reforzar la vigilancia marítima y la cooperación internacional. Además, subrayaron el trabajo coordinado entre distintas unidades policiales durante más de un día en condiciones complejas en alta mar. Este tipo de operaciones refleja la creciente sofisticación del combate al crimen organizado en la región. El caso ahora avanza en el ámbito judicial, donde se determinarán las responsabilidades de los detenidos.

🌐 Guardacostas intercepta embarcación con 1,901 paquetes de cocaína en el Pacífico Central de ...

Costa Rica: El país registró en el primer trimestre de 2026 un aumento sin precedentes en el decomiso de drogas, cuadruplicando las incautaciones de cocaína respecto al mismo

período del año anterior y alcanzando cifras récord. Según el Ministerio de Seguridad Pública, se pasó de cerca de 3 toneladas en 2025 a más de 12 toneladas en 2026, en un contexto de operativos reforzados y mayor eficacia en la intercepción de rutas del narcotráfico. Las autoridades atribuyen este salto a una intensificación de controles y a la mejora en las capacidades operativas de la Fuerza Pública, lo que marca, según el gobierno, un punto de inflexión en la lucha contra este fenómeno, aunque también evidencia la magnitud del desafío que enfrenta el país como corredor del tráfico internacional de drogas. El incremento no se limita a la cocaína: las incautaciones de crack aumentaron de 16.380 a 20.900 dosis, mientras que la marihuana casi se cuadruplicó, pasando de una a cerca de cuatro toneladas. Este desempeño ha estado fuertemente respaldado por la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, como lo demuestra una operación conjunta que permitió decomisar 4,4 toneladas de droga en el Pacífico. El gobierno de Rodrigo Chaves ha destacado estas alianzas como clave para fortalecer el control de rutas marítimas y golpear a organizaciones criminales, entre ellas redes vinculadas al narcotráfico colombiano. En conjunto, los resultados reflejan una mayor presión sobre las bandas, pero también anticipan un escenario de persistente complejidad en la región.

🌐 Se cuadruplica el decomiso de droga en Costa Rica y alcanza cifras récord en 2026

Bolivia: La captura en Santa Cruz de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias “Mapaya”, líder de la banda criminal Los Espartanos, confirma la creciente proyección internacional de estructuras delictivas originadas en Buenaventura. El operativo, que dejó además 12 detenidos, revela que estos grupos —tradicionalmente considerados actores locales— están operando fuera de Colombia, utilizando otros países como refugio, plataforma logística y nodo para actividades criminales vinculadas al narcotráfico. En el caso de los Espartanos, su rol en la contaminación de contenedores y envíos marítimos de cocaína los conecta directamente con redes internacionales de tráfico. La detención de “Mapaya” se inscribe en un patrón más amplio de “migración criminal” iniciado tras la fragmentación de la banda La Local en 2020, que empujó a sus miembros a expandirse hacia países como Chile, España y ahora Bolivia. Esta internacionalización responde a la lógica de las economías ilegales, que requieren múltiples puntos de operación para sostener el flujo de drogas y capitales ilícitos. En ciudades como Santa Cruz —epicentro regional del tráfico— estas bandas encuentran condiciones propicias para articular rutas hacia mercados globales. El caso refuerza así las alertas sobre la consolidación de redes criminales latinoamericanas cada vez más transnacionales, con capacidad de diversificar actividades y ampliar su presencia territorial.

🌐 Captura en Bolivia alerta sobre la internacionalización de pandillas colombianas

Panamá: Las autoridades panameñas han identificado el servicio de encomiendas como una nueva modalidad utilizada por redes criminales para el traslado de drogas a nivel interno, lo que ha encendido las alertas en el país. Casos recientes en Chiriquí y Darién evidencian cómo las sustancias ilícitas son camufladas en paquetes con productos cotidianos, como harina o café, y transportadas en vehículos de empresas de mensajería o buses interprovinciales. Este fenómeno se suma al rol tradicional de Panamá como país de tránsito de droga proveniente de Suramérica con destino a Estados Unidos y Europa, en un contexto donde operan cerca de 39 empresas de encomiendas y unas 180 pandillas locales que facilitan la distribución. La cocaína continúa siendo la sustancia más incautada, generalmente en paquetes de aproximadamente un kilogramo. El aumento de esta modalidad ocurre en paralelo a cifras elevadas de decomisos: en 2025 se incautaron cerca de 44 toneladas de droga y, hasta marzo de 2026, más de 20,5 toneladas en distintas operaciones.

Aunque las autoridades destacan avances en la lucha contra el narcotráfico internacional, persisten debilidades en el combate al crimen local, según expertos, debido a la falta de continuidad en la política criminal y cambios frecuentes en la conducción institucional. En este escenario, el uso de encomiendas refleja la creciente sofisticación de las estructuras delictivas, que adaptan sus métodos para evadir controles, mientras Panamá continúa bajo fuerte presión de las redes del narcotráfico regional e internacional.

🌐 Drogas viajan en encomiendas, una modalidad que alerta a las autoridades en Panamá

América Latina: El 81% de las organizaciones en la región reporta un aumento significativo de ciberataques en los últimos dos años, mientras que el 83% advierte que estas amenazas se han vuelto más sofisticadas, según un informe de Kaspersky. El estudio revela que los principales riesgos están vinculados a brechas en entornos de nube y al uso de inteligencia artificial por parte de ciberdelincuentes, además de amenazas tradicionales como phishing, ransomware y ataques a la cadena de suministro. Este escenario refleja una creciente complejidad en el ecosistema digital, donde los atacantes combinan herramientas avanzadas para evadir defensas y optimizar sus operaciones, aumentando la presión sobre las capacidades de seguridad corporativa. A nivel interno, las empresas enfrentan dificultades para responder con rapidez, especialmente en procesos como el análisis de incidentes y la detección en tiempo real, lo que amplía la exposición a riesgos. Frente a este panorama, los expertos recomiendan fortalecer la inteligencia de amenazas, integrar soluciones tecnológicas más avanzadas y automatizar procesos de seguridad para mejorar la capacidad de reacción. La conclusión central es que la región enfrenta una brecha estructural en ciberseguridad que exige una estrategia integral basada en tecnología, talento y mejores prácticas operativas para enfrentar un entorno cada vez más desafiante.

🌐 El 81% de las organizaciones en América Latina reporta un aumento crítico de ciberataques - No...

Radar América Latina-Estados Unidos



Cuba-Estados Unidos: El presidente Donald Trump afirmó que “muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba”, sugiriendo la posibilidad de un cambio de régimen en la isla y prometiendo apoyo a los cubanos, especialmente a la comunidad en el exilio. Señaló que, tras el conflicto con Irán, Cuba pasará a ocupar un lugar central en la agenda de política exterior de Washington, en un contexto de creciente endurecimiento de la postura estadounidense hacia La Habana. Las declaraciones se producen en medio de fuertes tensiones con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, quien rechazó cualquier injerencia externa y defendió la soberanía del país. Mientras Estados Unidos insiste en la necesidad de un cambio político como condición para un eventual apoyo, el régimen cubano reafirma su negativa a ceder ante presiones, manteniendo la incertidumbre sobre la evolución de la relación bilateral y los próximos movimientos de Washington. Trump también prometió respaldar a los cubanoamericanos que han denunciado abusos tras emigrar, reforzando su narrativa política hacia ese electorado. En paralelo, figuras clave de su administración han insistido en la necesidad de transformar el sistema político cubano como requisito para normalizar relaciones. El histórico embargo económico —vigente por más de seis décadas— sigue siendo un elemento central

del conflicto. Este nuevo giro retórico sugiere un reposicionamiento estratégico de Cuba dentro de la política exterior estadounidense. En este contexto, crece la expectativa sobre posibles medidas concretas que podrían intensificar aún más la presión sobre la isla.

🌐 Donald Trump: “Muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba”

Cuba-Estados Unidos: El dictador Miguel Díaz-Canel advirtió sobre un escenario de máxima tensión con Estados Unidos y llamó a la población a prepararse ante una posible “agresión militar”, en medio de una profunda crisis económica y energética en la isla. En un discurso conmemorativo, el mandatario describió una “cotidianidad que duele”, marcada por apagones prolongados, paralización de industrias, escasez de combustible y deterioro de servicios básicos. La situación se ha agravado tras nuevas medidas de la administración de Donald Trump, que restringen el suministro de petróleo a Cuba y han dejado al país prácticamente sin fuentes de energía, tras la interrupción de envíos desde Venezuela y otros proveedores. El endurecimiento del embargo y la presión económica han intensificado el malestar social, con protestas en varias zonas del país, mientras el Gobierno cubano combina un discurso de resistencia con llamados al diálogo. Aunque existen contactos diplomáticos y señales puntuales de acercamiento, como la liberación de presos y cierta apertura económica, no hay avances concretos hacia un acuerdo. En este contexto, las declaraciones de Díaz-Canel reflejan tanto la gravedad de la crisis interna como el deterioro de la relación bilateral, en un escenario donde la retórica de confrontación convive con intentos aún frágiles de negociación.

🌐 “La cotidianidad cubana duele”: Díaz-Canel llama a estar listos para una “agresión militar” de EE...

Cuba-Estados Unidos: El país atraviesa una coyuntura crítica marcada por la combinación de fuertes presiones externas —especialmente la política de máxima presión del presidente Donald Trump— y profundas debilidades internas. Mientras Washington endurece el bloqueo, incluyendo restricciones energéticas que agravan el colapso económico, el gobierno cubano mantiene su postura de defensa de la soberanía y el sistema político, aunque ha comenzado a introducir cambios parciales, como autorizar inversiones de emigrados en sectores productivos e incluso financieros. Estas medidas, sin embargo, no se extienden en igual medida a los ciudadanos dentro de la isla, reflejando una apertura limitada en un contexto de alta incertidumbre. Al mismo tiempo, se han reconocido contactos con Estados Unidos, aunque sin claridad sobre su alcance ni avances concretos. El deterioro económico y social es profundo: apagones prolongados, inflación, escasez de alimentos y medicinas, y un sistema productivo debilitado configuran una crisis más desigual que la vivida en los años noventa, con una brecha creciente entre quienes logran prosperar y una mayoría empobrecida. Factores como reformas internas mal implementadas, la caída del apoyo venezolano, el impacto de la pandemia y errores en la planificación económica han agravado la situación. Aunque el gobierno impulsa nuevas reformas y busca atraer inversión extranjera, la falta de confianza en las reglas del juego limita su efectividad. En este escenario, el país enfrenta un abanico de posibles desenlaces —desde cambios graduales hasta escenarios más disruptivos—, en medio de una creciente urgencia interna por transformaciones que respondan a las necesidades de la población.

🌐 ¿Y qué va a pasar en Cuba? | Tribuna

Cuba-estados Unidos: Un reportaje del *The Wall Street Journal*, citado por *Diario de Cuba*, vuelve a situar a Raúl Castro y su entorno familiar en el centro del poder real en la isla, especialmente en el marco de eventuales negociaciones con Estados Unidos. Aunque Miguel

Díaz-Canel ostenta formalmente la presidencia, el artículo sostiene que las decisiones estratégicas siguen en manos de una red familiar, militar y empresarial encabezada por el exmandatario. En este esquema destacan tres figuras clave: su hijo Alejandro Castro Espín —experimentado interlocutor en relaciones con Washington—, su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro (“El Cangrejo”), y su sobrino nieto Óscar Pérez-Oliva, actual viceprimer ministro. Todos ellos aparecen como actores relevantes tanto en la continuidad del régimen como en los contactos con EE. UU., reflejando una lógica de poder basada en la lealtad familiar más que en estructuras institucionales formales. El reportaje también subraya el rol central del conglomerado militar GAESA como eje económico del sistema, controlando sectores estratégicos como el turismo, el comercio y las finanzas, y funcionando como fuente clave de poder político. La conexión entre este aparato económico y la familia Castro refuerza la idea de una continuidad no solo política, sino también patrimonial. En este contexto, figuras como Pérez-Oliva emergen como posibles relevos dentro del esquema gobernante, mientras que perfiles como “El Cangrejo” ilustran la informalidad y opacidad en el acceso al poder. En conjunto, la investigación describe un sistema donde la autoridad real se concentra fuera de los cargos visibles, consolidando un modelo en el que la sucesión, la economía y la diplomacia siguen orbitando en torno al núcleo familiar de los Castro.

🌐 'El Tuerto' y 'El Cangrejo', los enviados de Raúl Castro para negociar con EE UU el futuro de Cub...

Venezuela-Estados Unidos: Estados Unidos dio un paso decisivo hacia la flexibilización de las sanciones al autorizar transacciones financieras con cuatro entidades bancarias estatales, incluido el Banco Central de Venezuela, en un giro significativo respecto del régimen restrictivo vigente desde 2017. Las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permiten por primera vez operar, pagar y mover dinero en el sistema financiero internacional, habilitando a bancos corresponsales, plataformas de pago y otras instituciones estadounidenses a prestar servicios sin incurrir en sanciones. La medida abarca transferencias, cambio de divisas, servicios de tarjetas, depósitos y operaciones de nómina, entre otras actividades habituales, lo que representa un cambio sustantivo en la capacidad operativa del sistema financiero venezolano. Además, Washington retiró de la lista negra a un alto funcionario del gobierno, Reinaldo Muñoz, en el marco de una estrategia más amplia de ajuste del régimen sancionatorio. El alivio financiero se produce en un contexto de normalización progresiva de las relaciones entre Caracas y Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero y la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. La decisión constituye un importante respaldo para la administración interina, aunque no implica el levantamiento total de las sanciones, ya que no autoriza el desbloqueo de activos ni elimina las restricciones sobre individuos señalados por corrupción u otros delitos. El esquema mantiene un mecanismo de presión selectiva mientras abre canales de reactivación económica, en paralelo a un creciente interés de empresas estadounidenses por invertir en el país. En este marco, el Gobierno venezolano busca mejorar las condiciones de seguridad jurídica, mientras Washington combina incentivos y condicionamientos en una dinámica gradual de apertura económica vinculada a reformas y al incremento del suministro petrolero hacia Estados Unidos.

🌐 Estados Unidos levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y a otras tres entidades

México-Estados Unidos: La presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono de sus críticas contra las detenciones de migrantes realizadas por ICE, al afirmar que muchos mexicanos en Estados Unidos tienen como “único delito” carecer de documentos migratorios, pese a ser

trabajadores. Sus declaraciones se producen tras la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia en Louisiana —el caso más reciente de una serie de fallecimientos—, lo que llevó al Gobierno mexicano a intensificar sus reclamos diplomáticos y a instruir a su red consular para que visite diariamente los centros de detención y brinde asistencia directa a los connacionales. Sheinbaum confirmó además que ha planteado su preocupación al presidente Donald Trump, manifestando el desacuerdo de México con las prácticas de detención. Desde Washington, la Casa Blanca defendió la política migratoria argumentando que responde al mandato electoral de deportar a inmigrantes indocumentados, mientras el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las acciones se realizan conforme a la ley. Sin embargo, el caso reciente eleva a 15 el número de migrantes mexicanos fallecidos bajo custodia o en operativos desde el inicio del segundo mandato de Trump en 2025, lo que ha generado una fuerte reacción de la Cancillería mexicana, que calificó la situación de “inaceptable” y denunció deficiencias graves en los centros de detención. En este contexto, el Gobierno de México anunció que continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para proteger a sus ciudadanos, en un escenario de creciente tensión bilateral en materia migratoria.

🌐 Sheinbaum sube el tono contra detenciones de ICE: “Hay muchos mexicanos que su único delito...”

México-Estados Unidos: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó a dos casinos y tres personas vinculadas al Cártel del Noreste en Tamaulipas, acusados de apoyar actividades como tráfico de fentanilo, lavado de dinero, extorsión y tráfico de migrantes. Entre las entidades señaladas figuran establecimientos en Nuevo Laredo y Tampico, presuntamente utilizados para blanquear ganancias del narcotráfico mediante operaciones de juego, además de servir como espacios de intimidación por parte del grupo criminal. Las sanciones son resultado de investigaciones de la DEA y otras agencias de seguridad, y buscan desarticular las redes financieras y logísticas del cártel, heredero de Los Zetas y con fuerte presencia en la frontera norte de México. Las personas sancionadas incluyen a operadores clave del cártel, como responsables del tráfico de migrantes y colaboradores cercanos de su estructura criminal, así como un abogado y un activista acusados de facilitar sus operaciones más allá de funciones legales o de defensa. Según las autoridades estadounidenses, estos individuos habrían contribuido a sostener las actividades delictivas, incluso desde el ámbito legal y mediático. Como consecuencia, todos los sancionados tendrán sus bienes bloqueados y quedarán impedidos de realizar transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses, en una medida que refuerza la estrategia de Washington de atacar las finanzas y redes de apoyo de los grupos criminales transnacionales.

🌐 Estados Unidos sanciona a casinos y tres personas vinculadas con el Cártel del Noreste en Tam...

Nicaragua-Estados Unidos: Estados Unidos lanzó una de sus ofensivas más contundentes contra la estructura económica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al sancionar a cinco individuos —incluidos dos de sus hijos— y a siete empresas vinculadas al sector aurífero, considerado clave para financiar el aparato político. La medida, adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, apunta a una red de compañías fachada y testaferros que, según Washington, generan divisas, lavan activos y consolidan el control del régimen. La inclusión de Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo refuerza las acusaciones de nepotismo y de concentración del poder en el núcleo familiar. El eje de la ofensiva está en el oro, convertido en una de las principales fuentes de ingresos del régimen desde 2020. Empresas como EMSA y Grupo Minero Xiloá habrían operado como engranajes de un sistema que canaliza recursos hacia el poder, incluso con posibles vínculos al financiamiento de estructuras paramilitares. Las sanciones implican el bloqueo de activos

en EE.UU. y la prohibición de transacciones, con riesgos de sanciones secundarias para actores internacionales. En síntesis, Washington apunta directamente al corazón financiero del régimen, elevando la presión económica con el objetivo de erosionar su capacidad de sostenerse en el poder. A casi ocho años de la crisis de 2018, la estrategia estadounidense reafirma un enfoque de presión sostenida sobre Managua. El mensaje es claro: atacar las fuentes de financiamiento del régimen es clave para limitar su margen de maniobra. Sin embargo, persisten dudas sobre la eficacia real de estas sanciones para generar cambios políticos concretos en el corto plazo.

🌐 Estados Unidos sancionó a los hijos de Daniel Ortega y golpeó una red de oro del régimen de Ni...

Costa Rica-Estados Unidos: El Gobierno de Rodrigo Chaves ha impulsado un cambio significativo en la política exterior de Costa Rica, alejándose de su histórica neutralidad para alinearse con la estrategia internacional de Donald Trump. Entre las decisiones más relevantes destacan la declaración como organizaciones terroristas de grupos como Hamás y Hezbolá, el cierre de la embajada en Cuba y la aceptación de migrantes deportados desde Estados Unidos. Estas medidas reflejan un viraje hacia una política exterior más pragmática y cercana a Washington, en contraste con la tradición de “neutralidad perpetua, activa y no armada” que ha caracterizado al país desde 1983. El giro también responde a factores económicos y estratégicos, como la fuerte dependencia comercial con Estados Unidos y el fortalecimiento de vínculos con aliados como Israel. Sin embargo, ha generado críticas por su posible impacto en la autonomía diplomática del país y por el abandono de principios históricos. Analistas advierten que Costa Rica se está convirtiendo en un “seguidor acrítico” de la política estadounidense, incluso en temas sensibles como la militarización de la lucha contra el narcotráfico o la recepción de migrantes deportados. Aunque el Gobierno defiende estas decisiones como una “modernización” del concepto de neutralidad, el debate refleja una tensión creciente entre pragmatismo económico y tradición diplomática. Este reposicionamiento también se evidencia en su participación en iniciativas regionales impulsadas por Washington, como la cooperación en seguridad. Asimismo, decisiones como el cierre de la embajada en Cuba han sido interpretadas como gestos políticos para reforzar esa alineación. En conjunto, el cambio marca un punto de inflexión en la política exterior costarricense y redefine su rol en el escenario regional.

🌐 Costa Rica rompe su tradición diplomática de neutralidad y se suma a la línea dura de Trump

República Dominicana-Estados Unidos: Las remesas hacia República Dominicana alcanzaron USD 3,019.6 millones en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento interanual del 1.9%, consolidándose como un pilar clave para la estabilidad económica del país. Solo en marzo, los envíos sumaron USD 1,149.2 millones, impulsados principalmente por la diáspora en Estados Unidos, que aportó el 84.2% del total. Este desempeño se vio favorecido por factores coyunturales como los reembolsos de impuestos en ese país, así como por un mercado laboral relativamente sólido, con una baja en el desempleo y expansión del sector servicios, donde trabaja una gran proporción de dominicanos en el exterior. España se posiciona como el segundo origen de remesas, aunque con una participación significativamente menor. A pesar del entorno internacional complejo —marcado por presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente—, estos flujos continúan sosteniendo el consumo interno y la estabilidad macroeconómica. El Banco Central proyecta que las remesas crecerán un 3.5% en 2026, aunque advierte sobre posibles riesgos como nuevos impuestos a los envíos desde Estados Unidos y la persistente incertidumbre global. En conjunto con la inversión extranjera, el turismo y las exportaciones, estos ingresos han contribuido a fortalecer las reservas internacionales, que superan los USD 16,000 millones, y a la apreciación de la moneda local. Así, las

remesas siguen siendo un amortiguador clave frente a shocks externos y un componente central del equilibrio económico del país.

🌐 Remesas a República Dominicana suman USD 3,019.6 millones en el primer trimestre de 2026 y...

Pacífico-Estados Unidos: Las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo ataque contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico oriental, dejando al menos cuatro muertos, en el marco de una ofensiva creciente liderada por el Comando Sur.

La operación, ejecutada por una fuerza de tarea conjunta, forma parte de una estrategia más amplia para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense, que ya ha resultado en la destrucción de decenas de embarcaciones y la muerte de al menos 174 personas. Según Washington, estas acciones se dirigen contra organizaciones consideradas “terroristas”, aunque no se han presentado pruebas públicas sobre la presencia de narcóticos en las naves atacadas ni sobre la afiliación de sus ocupantes con carteles. El Gobierno de Donald Trump ha calificado esta campaña como un “conflicto armado” contra el narcotráfico, lo que le permitiría realizar ataques letales sin revisión judicial, bajo el argumento de que los fallecidos son “combatientes ilegales”. Esta postura ha generado cuestionamientos por parte de legisladores y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la ausencia de debido proceso y el cambio respecto a políticas anteriores de interdicción. Además, las operaciones han dejado múltiples incidentes sin esclarecer, con sobrevivientes no localizados tras ataques y misiones de rescate suspendidas. En este contexto, la estrategia estadounidense abre un debate sobre los límites legales y éticos en la lucha contra el narcotráfico en aguas internacionales.

🌐 EE.UU. ataca a otra embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Pacífico y deja c...

América Latina-Estados Unidos: La estrategia del presidente Donald Trump para frenar el tráfico de cocaína desde Sudamérica enfrenta serias limitaciones pese al despliegue de tecnología avanzada, inteligencia artificial, drones y operaciones militares.

Aunque los puertos están cada vez más vigilados y se han intensificado los controles, las redes criminales —altamente adaptables y con alcance global— continúan modificando rutas y métodos, en una dinámica constante de “gato y ratón” que dificulta lograr impactos sostenidos. El problema se agrava por factores estructurales: la producción de cocaína alcanza niveles récord —más de 3.700 toneladas— y el consumo global sigue en aumento, con Estados Unidos como principal mercado. La mayor parte del tráfico se realiza a través de contenedores en puertos comerciales, donde solo una pequeña fracción puede ser inspeccionada, lo que reduce significativamente el riesgo de detección. Además, las organizaciones criminales han diversificado rutas —incluyendo nuevas vías por Guyana, Surinam, Asia y Australia— y perfeccionado técnicas de ocultamiento, lo que pone en duda la eficacia de medidas como los ataques marítimos impulsados por Washington. En este contexto, expertos advierten que las estrategias centradas en interceptaciones o acciones militares tienden a impactar solo en los eslabones más bajos de la cadena, sin alterar los incentivos económicos del narcotráfico. La enorme rentabilidad del negocio —donde un kilogramo puede multiplicar su valor más de veinte veces— y la falta de alternativas económicas en zonas productoras refuerzan la persistencia del fenómeno. Así, la política antidrogas de Trump enfrenta un desafío estructural: contener un mercado en expansión global con herramientas que no logran desarticular sus causas profundas.

🌐 Donald Trump quiere detener el tráfico de drogas originado en Sudamérica. ¿Eso es posible?



Contacto

 @zovatto55

 latamasesoria@latamae360.com

 www.linkedin.com/in/danielzovatto360